

BOLETIN



OFICIAL

DE

LA

PROVINCIA DE SEGOVIA

Inmediatamente que los señores Alcaldes y Secretarios reciban este Boletín, dispondrán que se fije en el sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. Los señores Secretarios cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, de conservar los números de este Boletín, coleccionados ordenadamente para su encuadernación, que deberá verificarse al final de cada año.

SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

En la Capital.—Trimestre, pts. 5,00
Fuera de id.— — — — 6,35
Número suelto..... 0,25

PRECIOS DE INSERCIÓN

Los edictos y anuncios oficiales y particulares que sean de pago satisfarán por línea... 0,30

Las leyes, órdenes y anuncios que se manden publicar en los Boletines Oficiales se han de remitir por todas las autoridades al Gobernador respectivo, por cuyo conducto se pasarán a los mencionados periódicos. Se exceptúa de esta regla al Excmo. Sr. Capitán General. Los anuncios particulares y avisos de suscripciones se reciben en la Imprenta Provincial (Establecimientos Provinciales de Beneficencia).

PARTE OFICIAL

S. M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. g.), S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, S. A. R. el Príncipe de Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real Familia, continúan sin novedad en su importante salud.

Ministerio de Hacienda

REAL ORDEN NÚM. 712

Ilmo. Sr.: Vista la consulta formulada por la Delegación de Hacienda de Madrid, relativa al pago de los derechos de custodia de los depósitos que por abandono de sus dueños fueron adjudicados al Estado por Real decreto-ley de 24 de Enero de 1928:

Considerando que es legítimo en general el derecho de los depositarios a percibir los derechos de custodia devengados por los depósitos de referencia, pero a condición de que realizada la venta de los valores que integran éstos su importe cubra el de los derechos de custodia de los mismos,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el pago de los derechos de custodia de los depósitos en efectos, adjudicados al Estado por Real decreto-ley de 24 de Enero de 1928, deberán satisfacerse siempre y cuando el importe de la enajenación de los valores que integran los mismos cubra el de los repetidos derechos de custodia.

De Real orden lo comunico a V. I. para su cumplimiento. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 18 de Septiembre de 1929.—Calvo Sotelo. Señores Director general de Tesorería y Contabilidad y Delegados de Hacienda de las provincias.

(Gaceta del 19 de Septiembre.)

Diputación Provincial

Sesión ordinaria de pleno del día 10 de Septiembre de 1929

En la ciudad de Segovia, a diez de Septiembre de mil novecientos veintinueve, siendo las once en punto de la mañana y previa convocatoria de fecha tres del actual, inserta en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia correspondiente al día seis y circulada por escrito y entregada en su domici-

lio a los Sres. Diputados directos y corporativos, titulares y suplentes, el repetido día tres, se reunieron en el salón de sesiones de la Excm. Diputación Provincial, con el fin de celebrar sesión ordinaria de pleno, bajo la presidencia del Excmo. e Ilmo. Sr. don Segundo Gila y Sanz, Presidente de la Corporación, los Sres. Diputados directos y titulares don Mariano Larios Cibatti, don Andrés Marcos Callejo; los corporativos titulares don Alfredo Bobillo González, don Manuel Gómez García y don Valentin Cardiel Merino; los directos suplentes don Juan García Segovia y don José González Triviño; y los corporativos suplentes don Gregorio Fraile Muñoz, don Felipe Díez Centeno, don Conrado Illera Fraile y don Fernando Hernández Bachiller; hallándose presentes también el Interventor de fondos provinciales don Gregorio García Chinchilla y el infrascrito Secretario don Timoteo de Antonio y Gil.

Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, el Secretario dió lectura de la convocatoria antes citada y de las disposiciones contenidas en el capítulo 4.º, título 3.º del libro 1.º del vigente estatuto provincial y en el capítulo 2.º, título 4.º del libro 2.º del mismo estatuto y del acta de la sesión plenaria últimamente celebrada, la cual fué aprobada por unanimidad.

Cuentas provinciales del ejercicio de 1929.—Capital.—Seguidamente se dió cuenta por Secretaría de que, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 297 del estatuto provincial, las cuentas de esta Diputación correspondientes al ejercicio de 1928 se habían publicado en extracto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia correspondiente al día 8 de Marzo del año actual, habiendo estado expuestas al público en la Secretaría de la Corporación hasta el día de hoy, sin que contra las mismas se hayan presentado reparos ni reclamaciones por los Ayuntamientos, las Corporaciones y los habitantes de la provincia; y habiéndose manifestado por la Presidencia que la aprobación provisional de referidas cuentas que aparecen insertas en el libro de actas de las sesiones de la Excm. Diputación, perteneciente al año actual, a sus folios 81 vuelto, 82, 82 vuelto y 83, corresponde a la Corporación en pleno, requiriéndose para ello el voto favorable de la mayoría de los Diputados corporativos, titulares y suplentes, y de los directos suplentes que durante el ejercicio a que dichas cuentas se refieren no hayan sustituido a los respectivos titula-

res, conforme previene el artículo 299 del tan repetido estatuto; la Excm. Diputación por unanimidad y constituida en la forma que al principio de este acta se expresa, acuerda aprobar provisionalmente las cuentas provinciales del ejercicio económico de 1928 y que se las dé la tramitación que legalmente corresponda.

Salida.—En este momento y por haber terminado la misión que les había reunido en el salón de sesiones, abandonaron éste los Diputados directos y corporativos suplentes don Juan García Segovia, don José González Triviño, don Conrado Illera Fraile y don Fernando Hernández Bachiller, quedando sólo en dicho salón los Diputados directos titulares don Segundo Gila y Sanz, Presidente; don Mariano Larios y don Andrés Marcos; los corporativos titulares don Alfredo Bobillo, don Manuel Gómez y don Valentin Cardiel y los corporativos suplentes don Gregorio Fraile y don Felipe Díez Centeno. Y resultando haber número suficiente de señores Diputados para adoptar acuerdos, continuó la sesión a fin de resolver los demás asuntos que figuran en el orden del día.

Devolución de fianza.—Segovia.—Dióse lectura de una instancia de fecha 5 de Abril del presente año, suscrita por don Justo Santos y Ruiz Zorrilla, mayor de edad y vecino de Madrid, solicitando que se den las órdenes oportunas a la Caja General de Depósitos para que le sean devueltos dos títulos de la Deuda amortizable al 5 por 100, emisión de 26 de Febrero de 1920, de la serie D., número 4.395 y 5.057, de 12.500 pesetas nominales cada uno, depositados en dicha Caja y constituidos ambos para servir de garantía a don Fernando Carral Romero, ya difunto, para responder del cargo de Depositario de fondos provinciales de esta Diputación.

Vistos la Real orden de 7 de Octubre de 1899 y el Real decreto de 21 de Enero de 1901.

Considerando: que si bien es facultad de las Diputaciones Provinciales devolver las fianzas que para responder de su cargo tengan constituidas los Depositarios de sus fondos, esta devolución ha de hacerse bajo la responsabilidad de las respectivas Corporaciones, por lo que de efectuarse la devolución solicitada por don Justo Santos, los Sres. Diputados que votaran el acuerdo quedarían subrogados en las responsabilidades que pudieran exigirse al Depositario que fué de los

fondos de esta Corporación don Fernando Carral Romero.

Considerando: Que aun cuando es de suponer no habría de resultar responsabilidad alguna contra el señor Carral, estando sin aprobar por el Tribunal de la Hacienda Pública las cuentas de esta Corporación a partir del año económico de 1924-25, la más elemental prudencia aconseja no sea devuelta la fianza objeto de la petición, hasta tanto se aprueben las cuentas rendidas al citado Tribunal desde 1924-25 hasta 1927.

La Excm. Diputación, por unanimidad, acuerda que no procede acceder a lo solicitado por el Sr. D. Justo Santos y Ruiz Zorrilla, hasta tanto que por el Tribunal Supremo de la Hacienda Pública sean aprobadas las cuentas de esta Corporación desde el ejercicio de 1924-25 al de 27, ambos inclusive.

Suplemento de crédito.—Al liquidarse en 31 de Diciembre último el presupuesto de 1928, quedó una existencia de 111.842,92 pesetas de la subvención que el Estado concede para la construcción de caminos vecinales, cuya cantidad pasó a formar parte del presupuesto extraordinario, toda vez que en éste está comprendido todo lo que se refiere a construcción, por consecuencia del empréstito contratado con el Banco de Crédito Local.

Por acuerdo de la Comisión Provincial de 4 de Junio del corriente año, y por virtud de la autorización concedida por el Real decreto de 16 de Marzo de 1928, dicha cantidad fué destinada a la conservación de caminos vecinales traspasados por el Estado a la Diputación.

Por lo expuesto, es visto que en el presupuesto ordinario de esta Diputación no existe crédito para poder invertir las 111.842,92 pesetas y por ello la Excm. Diputación, por unanimidad acuerda un suplemento de crédito por la cantidad antes mencionada, al que figura en el capítulo 11.º, artículo 3.º, partida 1.ª del presupuesto ordinario del corriente ejercicio.

Suplementos y ampliación de créditos.—El haberse encargado la Diputación de confeccionar el padrón de cédulas personales de Segovia y la recaudación de este impuesto en la misma Capital, ha ocasionado gastos que hay que satisfacer inmediatamente, como son la entrega a domicilio de las hojas declaratorias, convenido en 1.200 pesetas con los empleados municipales que efectuaban ese servicio por cuenta del Ayuntamiento, y

más adelante los de expedición de las cédulas; y aun cuando hoy existe cantidad en presupuesto para satisfacer estos gastos, no la habrá seguramente en el mes de Diciembre, por lo que, en evitación de transferencias de crédito, es conveniente un suplemento de 4.000 pesetas, al crédito que figura en el capítulo 5.º, artículo 1.º, partida 1.ª, tirada de sellos impresos y demás necesario para el cobro de arbitrios o impuestos provinciales, incluso personal temporero.

El crédito que existe en el capítulo 6.º, artículo 2.º, partida 12, honorarios de amas de lactancia externas, también debe ampliarse en 15.000 pesetas, pues no serán bastantes las 65.000 presupuestadas, debido a que en el primer semestre han sido pagadas 39.298.

Avicinándose el invierno, habrá que proveer de vestuario al personal subalterno, por lo que no quedando en presupuesto más que 31,30 pesetas, procede acordar un suplemento de 1.500 pesetas a la partida 5.ª, del artículo 4.º, del capítulo 6.º.

Quedando sólo 1.114,68 pesetas del crédito o partida 19 del capítulo 8.º, artículo 2.º, destinada a satisfacer los gastos de alumbrado de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia, y siendo aproximadamente de 450 pesetas el gasto mensual en los meses de invierno, precisa ampliarse con un suplemento de 1.500 pesetas.

Para subvenciones y gastos de carácter agrícola, forestal y ganadero, fueron incluidas en el capítulo 14, artículo 1.º, partida 1.ª, 30.000 pesetas, de las que en la actualidad van invertidas solamente 1.089,50. Como las expropiaciones hechas a los señores Marqués del Arco y don José Ruspoli ascienden a 117.740,90 pesetas, y teniendo en cuenta lo que pueda gastarse del capítulo hasta el fin del ejercicio, quedan disponibles de la consignación para abonar las 117.740,90 pesetas, 27.500, faltando por tanto para pagar las expropiaciones pesetas 90.240,90. Uniendo a esta cantidad lo que hay que pagar por derechos reales, inscripción y escritura, calculado en 5.000 pesetas, se tendrá la suma de 95.240,90, en cuya cantidad debe ampliarse el crédito antes mencionado.

Con el fin de poder atender al arreglo de la casa número 8 de la calle de San Agustín, heredada de doña Aquilina Josefa Blanco Peláez por los Establecimientos Provinciales de Beneficencia, procede también ampliar por medio del oportuno suplemento de crédito y por la cuantía de 20.000 pesetas, el que existe en el capítulo 8.º, para obras de los Establecimientos citados.

Como quiera que actualmente existen en el Banco de España, en cuenta corriente, como de la propiedad de la Diputación, más de 150.000 pesetas, y todos los servicios están satisfechos hasta la fecha, pueden cubrirse muy bien los suplementos de crédito relacionados.

También procede ampliar el crédito que figura en el capítulo 11.º, artículo 1.º, partida 13, para satisfacer los gastos de inspección al personal técnico de Vías y Obras, cuya ampliación, de 12.000 pesetas, nada afecta a los fondos provinciales, porque se abona con el 3 por 100 que para ese servicio se descuenta a los contratistas de sus certificaciones.

La Excm. Diputación Provincial, de conformidad con las anteriores propuestas formuladas por la Intervención de fondos provinciales y por

unanimidad, acuerda aprobar los suplementos de créditos antes indicados en la forma que se reseñan.

Herencia de doña Aquilina Josefa Blanco en favor del Hospicio.—En 25 de Marzo próximo pasado, falleció en Segovia doña Aquilina Josefa Blanco Peláez, bajo testamento otorgado en 8 de Septiembre de 1924, ante el Notario que fué de esta Ciudad D. Angel de Arce Rodríguez, en cuyo testamento instituyó por herederos universales del remanente de todos sus bienes, derechos y acciones, a los Establecimientos Provinciales de Beneficencia.

Participado por los Sres. Albaceas testamentarios de la señora Blanco Peláez a la Diputación Provincial, el fallecimiento de esta señora y la institución de herederos de su caudal hecha a favor de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia, dada cuenta a la Comisión provincial, ésta acordó aceptar en principio la herencia a beneficio de inventario, y con carácter definitivo en la sesión celebrada el 9 de Julio último.

Practicadas las operaciones testamentarias y firmado el cuaderno particional por los albaceas testamentarios, el Presidente de la Diputación en representación de los Establecimientos Provinciales de Beneficencia, herederos y Letrado director, fueron protocoladas en el del Notario de esta Ciudad D. Luis Rincón Lazcano en 12 de Julio próximo pasado, en cuyas operaciones fueron adjudicados a los citados Establecimientos de Beneficencia bienes por valor de 196.329,08 pesetas, en plena propiedad; 53.000 pesetas por el legado especial hecho al Hospicio de la casa situada en la calle de San Agustín, número 2, de esta Ciudad, y 71.500 en nuda propiedad de la casa sita en la misma población, calle de San Juan, número 8; o sea en junto 320.829,09 pesetas; estando formada la herencia propiamente dicha, o sean las 196.329,08 pesetas por los bienes siguientes:

	Pesetas
En metálico	7.272,08
En cédulas hipotecarias...	78.460,75
En títulos de la deuda pública.....	41.656,25
En acciones de la Sociedad Electra Segoviana.....	1.900,00
En acciones del Monte de Piedad de esta Capital..	25,00
En muebles.....	500,00
En una casa situada en esta Capital, bajada de la Canaleja, números 6 al 10..	66.500,00

Por consecuencia asimismo del fallecimiento de doña Aquilina Josefa Blanco Peláez, han pasado en plena propiedad y posesión a los Establecimientos Provinciales de Beneficencia los bienes siguientes, legados por don Pedro Santamaría y de los que tenía en usufructo la señora fallecida:

113.600 pesetas nominales, representadas por 38 títulos de la deuda perpetua interior al 4 por 100, procedentes de la venta de las casas número 8 de la Plaza del Corpus y 7 de la de San Martín, de esta Ciudad.

7.500 pesetas nominales, representadas por dos títulos de la misma clase de deuda perpetua interior al 4 por 100, procedente de la indemnización pagada por la Compañía «La Unión y el Fénix Español», por el incendio ocurrido el 26 de Diciembre de 1920, que destruyó parte de la casa de la plaza del Corpus número 8; y

68 fincas rústicas en término de Fuentemilanos, valuadas en 11.300 pesetas.

Teniendo en cuenta que la administración de los bienes inmuebles principalmente las fincas rústicas, presentan dificultades para la Diputación; que la casa de la bajada de la Canaleja, por el sitio que ocupa y distribución que tiene no puede destinarse a servicios dependientes de la Diputación, y considerando también las grandes ventajas que para los Establecimientos provinciales de Beneficencia reportará el convertir los títulos de la Deuda y demás efectos públicos en inscripciones intransferibles; la Asamblea, vista una propuesta del Sr. Presidente, por unanimidad, acuerda:

1.º Ratificar la aceptación de la herencia mencionada, hecha por la Comisión Provincial permanente.

2.º Que previos los trámites y requisitos legales se enajenen las cédulas hipotecarias, y si fuera factible y conveniente las acciones y bonos de la Cooperativa Electra Segoviana y Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Segovia, convirtiendo su importe en títulos de la Deuda Pública, que después serán convertidos en inscripciones intransferibles a nombre de los citados Establecimientos de Beneficencia.

3.º Que también se conviertan en inscripciones intransferibles a nombre de los mismos Establecimientos los títulos de la Deuda Pública, importantes 41.656,25 pesetas

4.º Que se conserve la casa de la calle de San Agustín, núm. 2, para instalar en ella servicios o dependencias a cargo de la Diputación o de entidades a las que esté obligada a facilitar local.

5.º Que previa la correspondiente autorización de la Superioridad, se enajenen en subasta pública la casa situada en esta Ciudad, bajada de la Canaleja número 6, y las fincas rústicas en término de Fuentemilanos.

6.º Que el metálico que se obtenga de esas subastas más el entregado por los albaceas testamentarios, importante 20.129,50 pesetas se invierta en las obras de elevación de aguas del río Eresma para las necesidades de los Establecimientos de Beneficencia, en otras obras precisas en los mismos Establecimientos y en las necesarias de la casa de la calle de San Agustín, número 2; debiendo previamente, antes de comenzarse esas obras, formarse los oportunos proyectos y presupuestos de las mismas.

Organización agro-pecuaria.—De orden del Sr. Presidente, el Secretario dió cuenta a los señores Diputados de los propósitos que, en principio, abraza la Diputación Provincial, relativos a la organización agro-pecuaria de la provincia, dispuesta por Real decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 26 de Julio del año actual.

También expuso el mismo Secretario que la Corporación Provincial, para mejor orientarse acerca de dicha organización, había sometido a la deliberación y consulta de los Municipios, entidades, organismos y particulares de la provincia, una encuesta publicada en el BOLETÍN OFICIAL extraordinario del 26 del pasado Agosto, y que para resolver en definitiva se estaba pendiente de las contestaciones que se fueran recibiendo, como así bien de que por el Ministerio de Economía Nacional se dicte el oportuno reglamento para la aplicación del Real decreto que ha dado origen a esta organización.

Los señores Diputados escucharon con gran atención las manifestaciones del Secretario, quedando enterados de los proyectos que acerca del interesante asunto tiene la Diputación y

que se concretarán en momento oportuno.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a la una de la tarde extendiéndose de ella la presente acta, que firma conmigo, el Secretario que certifica.—El Presidente, Segundo Gila.—El Secretario, Timoteo de Antonio y Gil.

2738

Dirección general de Obras públicas

Carreteras.—Reparación

Hasta las trece horas del día 21 de Octubre próximo se admitirán en el Negociado de conservación y reparación de carreteras del Ministerio de Fomento y en todas las Jefaturas de Obras públicas de la Península, a horas hábiles de oficina, proposiciones para optar a la subasta de las obras de riego asfáltico en los kilómetros 34,750 al 41 de la carretera de Estación de Villalba a Segovia, cuyo presupuesto asciende a 187.820,86 pesetas, debiendo quedar terminadas en el plazo de ocho meses, a contar de la fecha de comienzo de las obras, y siendo la fianza provisional de 5.634 pesetas.

La subasta se verificará en la Dirección general de Obras públicas, situada en el Ministerio de Fomento, el día 26 de Octubre a las diez horas.

El proyecto, pliego de condiciones, modelo de proposición y disposiciones sobre forma y condiciones de su presentación, estarán de manifiesto en el Ministerio de Fomento y en la Jefatura de Obras públicas de Segovia, en los días y horas hábiles de oficina.

Cada proposición se presentará en papel sellado de la clase 6.ª (3,60 pesetas, o en papel común con póliza de igual precio, desechándose, desde luego, la que que no venga con este requisito cumplido

El licitador acompañará a su proposición la relación de remuneraciones mínimas en la forma que se determina en el apartado (A) del Real decreto-ley de 6 de Marzo de 1929 (*Gaceta* del 7), y en el pliego de condiciones particulares y económicas que han de regir en la contrata de estas obras. Una vez que le sea adjudicado el servicio, presentará el contrato de trabajo que se ordena en el (B) del mismo Real decreto-ley.

Las Empresas, Compañías o Sociedades proponentes están obligadas al cumplimiento del Real decreto de 24 de Diciembre de 1928 (*Gaceta* del día siguiente) y disposiciones posteriores.

Madrid, 19 de Septiembre de 1929.—El Director general, P. D., González.

Hasta las trece horas del día 21 de Octubre próximo se admitirán en el Negociado de conservación y reparación de carreteras del Ministerio de Fomento y en todas las Jefaturas de Obras Públicas de la Península, a horas hábiles de oficina, proposiciones para optar a la subasta de las obras de riego asfáltico en los kilómetros 27 al 34,750 de la carretera de estación de Villalba a Segovia, cuyo presupuesto asciende a 211.755,25 pesetas, debiendo quedar terminadas en el plazo de catorce meses, a contar de la fecha de comienzo de las obras, y siendo la fianza provisional de 6.352 pesetas.

La subasta se verificará en la Dirección general de Obras Públicas,

situada en el Ministerio de Fomento, el día 26 de Octubre, a las diez horas. El proyecto, pliego de condiciones, modelo de proposición y disposiciones sobre forma y condiciones de su presentación, estarán de manifiesto en el Ministerio de Fomento y en la Jefatura de Obras Públicas de Segovia, en los días y horas hábiles de oficina.

Cada proposición se presentará en papel sellado de la clase 6.^a (3,60 pesetas) o en papel común, con póliza de igual precio, desechándose, desde luego, la que no venga con este requisito cumplido.

El licitador acompañará a su proposición la relación de remuneraciones mínimas, en la forma que se determina en el apartado (A) del Real decreto-ley de 6 de Marzo de 1929 (*Gaceta* del 7), y en el pliego de condiciones particulares y económicas que han de regir en la contrata de estas obras. Una vez que le sea adjudicado el servicio, presentará el contrato del trabajo que se ordena en el (B) del mismo Real decreto-ley.

Las Empresas, Compañías o Sociedades proponentes están obligadas al cumplimiento del Real decreto de 24 de Diciembre de 1928 (*Gaceta* del día siguiente) y disposiciones posteriores.

Madrid, 19 de Septiembre de 1929.—El Director general, P. D., González.

Alcaldía de Sepúlveda

Con el fin de discutir y aprobar el presupuesto de cargas de Justicia para el año próximo de 1930, como así mismo las cuentas correspondientes del ejercicio de 1928, se convoca a los señores representantes de los Ayuntamientos de los pueblos de este partido judicial para celebrar sesión, la cual tendrá lugar en la Sala Capitular de esta villa a las doce horas del día 10 de Octubre próximo.

Sepúlveda, 20 de Septiembre de 1929.—El Alcalde-Presidente, José María Zorrilla.

Comunidad de San Benito de Gallegos

No habiendo habido licitador en la primera subasta para el aprovechamiento de pastos y brozas del monte de dicha Comunidad, se anuncian las segundas que han de tener lugar en esta Casa Consistorial el día 5 de Octubre próximo a las nueve y a las once de su mañana respectivamente, bajo los mismos tipos de tasación y pliegos de condiciones que se tuvieron en cuenta en las primeras que se celebraron el día 20 del mes actual.

Narros de Cuéllar, a 23 de Septiembre de 1929.—El Presidente, Francisco Esteban.

Alcaldía de Miguel Ibáñez

Por la Guardia Civil del puesto de Bernardos, se ha puesto a disposición de esta Alcaldía una caballería asnal que encontró desmandada en este término y cuyas señas son las siguientes:

Edad cerrada, pequeña, pelo cardino claro, con lunares en el lomo y costillares, con cabezada y desherada.

Lo que se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia para que llegue a conocimiento de quien pudiera ser el dueño de dicha caballería, a fin de que se presente a recogerla y abonar gastos causados; pues de lo contrario pasado el tiempo reglamentario se procederá a subastarla.

Miguel Ibáñez, 21 de Septiembre de 1929.—El Alcalde, Gabriel Manso.

Comunidad de Villa y Tierra de Coca SUBASTA

No habiendo tenido efecto, por falta de licitadores, la primera subasta del fruto de piña albar de la sección tercera del monte «Pinar Viejo» y de «El Cantosal», de esta Comunidad, se anuncia una segunda subasta que se celebrará en esta Casa Consistorial el día 21 de Octubre próximo, a las once horas, bajo los nuevos tipos de tasación que a continuación se expresan y con sujeción a los mismos pliegos de condiciones facultativas y económicas y demás requisitos que sirvieron de base a la primera.

«Pinar Viejo», tercera sección, tasación 3.500 pesetas.

«El Cantosal», id., 50 id.

La subasta tendrá lugar ante el Sr. Alcalde Presidente o de quien legalmente le sustituya, con asistencia de un individuo de la Corporación, del Secretario de la misma y del empleado del ramo que designe la Jefatura del Distrito forestal de la provincia.

El acto se celebrará por el sistema de pliegos cerrados, que se presentarán durante la primera media hora de la señalada para la subasta, pudiendo hacer proposiciones a un solo lote o a los dos que comprende la subasta, cuidando de consignar el lote o lotes e importe de la proposición con arreglo al modelo que a continuación se inserta y extendidas en papel de 3,60 pesetas.

A los pliegos se acompañarán la cédula personal del interesado y el resguardo que acredite el depósito provisional del 5 por 100 del importe de la tasación, cuyo depósito podrá hacerse en esta Depositaria hasta la hora de empezar la subasta.

La fianza definitiva una vez adjudicada la subasta, será la del 10 por 100 de la cantidad por que se adjudique, y se constituirá en la Caja de esta Comunidad en cualquiera de las formas que establece el artículo 10 del reglamento de 2 de Julio de 1924, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación de la subasta, teniendo que ingresar también durante dicho plazo el 90 por 100 del valor en que haya sido adjudicada.

Coca, 21 de Septiembre de 1929.—El Alcalde Presidente, Mariano Sanz.

Modelo de proposición

Don..., vecino de..., según cédula personal que acompaña, enterado del anuncio inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para la subasta del fruto de piña albar de la sección tercera del monte «Pinar Viejo» y de «El Cantosal» y de los pliegos de condiciones facultativas y económicas, ofrece por dicho aprovechamiento la cantidad siguiente:

«Pinar Viejo», tercera sección, ... pesetas (en letra).

«El Cantosal», ... pesetas (id.)

(Fecha y firma del proponente.)

Alcaldía de Cantalejo SUBASTAS

El día 15 de Octubre próximo, a las once, se subastarán en esta Casa Consistorial 408 pinos negrales procedentes de la corta anual del monte de estos propios, los cuales han sido adjudicados al Ayuntamiento y cubican 140,231 metros cúbicos de madera y 28,636 metros cúbicos de leña. Servirá de base para la subasta la cantidad de 3.812,10 pesetas.

Todas las demás condiciones se ha-

llan de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Cantalejo, 17 de Septiembre de 1929.—El Alcalde, Angel Marañón.

El día 15 de Octubre próximo, a las doce, se subastarán en esta Casa Consistorial, 336.700 piñas abiertas, que pertenecen a los montes de Cantalejo, Cabezuela, Sebúcor, Fuenterrebollo y Navalilla; sirviendo de tipo para la subasta la cantidad de 1.346,80 pesetas.

Todas las demás condiciones se hallan de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Cantalejo, 17 de Septiembre de 1929.—El Alcalde, Angel Marañón.

Alcaldía del Real Sitio de San Ildefonso

Vacante por dimisión del que la desempeñaba, el cargo de Practicante de la Beneficencia municipal, dotada con el haber anual de seiscientos veinticinco pesetas, el cual a más de sus funciones propias, servirá de auxiliar al Inspector municipal de Sanidad, la Comisión municipal permanente de mi presidencia ha acordado su provisión en propiedad, mediante concurso, en la forma prevenida en el estatuto vigente y reglamentos de 23 de Agosto de 1924 y el de Sanidad de 9 de Febrero de 1925.

En su virtud, y cumpliendo el precitado acuerdo, se hace público por el presente, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde aquél en que aparezca inserto el presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan presentarse por quienes soliciten tomar parte en este concurso, sus instancias debidamente reintegradas, dirigidas a esta Alcaldía, acompañadas de los títulos o copia debidamente legalizadas de los mismos, y de cuantos méritos posean y quieran aducir.

San Ildefonso, 27 de Agosto de 1929.—El Alcalde, Pedro Gómez.

CÉDULAS PERSONALES

Aprobados por la Comisión Provincial los padrones de contribuyentes sujetos en los términos municipales que a continuación se expresan al pago del impuesto de cédulas personales, para el corriente año de 1929, quedan expuestos al público en las Secretarías de Ayuntamiento respectivas por el plazo de diez días, que empezarán a contarse desde que el presente vea luz en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, a fin de que los contribuyentes en él incluidos puedan examinarle y presentar las reclamaciones que a su derecho crean convenientes; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo, no se admitirá reclamación alguna.

Relación que se cita:

Aldeonsancho
Valdesimonte
Gomezerracín
Torrecilla del Pinar
Pedraza

PROYECTO DE PRESUPUESTO

Aprobado por las respectivas Comisiones permanentes de los pueblos que a continuación se expresan, el proyecto de presupuesto ordinario formado para el año del próximo ejercicio, se halla expuesto dicho documento juntamente con las ordenanzas respectivas para la exacción de arbitrios, certificaciones, memorias y demás documentos en la Secretaría municipal correspondiente por término

de ocho días hábiles, en que podrán ser examinados por cuantos lo deseen; pudiendo hacer cuantas reclamaciones u observaciones tuvieran por conveniente durante dicho plazo y ocho días más; haciéndolo público en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.º del reglamento de la hacienda municipal vigente.

Relación que se cita

Adrados
Frumales
Pedraza
Santiuste de San Juan Bautista

Presupuesto ordinario para 1930

Aprobados por las respectivas Corporaciones plenas de los pueblos que a continuación se expresan, el presupuesto ordinario formado para el próximo ejercicio de 1930, queda expuesto al público dicho documento con el proyecto, memoria, certificaciones, ordenanzas, etc., en la Secretaría municipal, por término de quince días, a fin de que pueda ser examinado por cuantas personas lo creyesen conveniente; pasado dicho plazo y durante quince días, a contar de la terminación del plazo de este edicto publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, podrán formularse las reclamaciones por las personas o entidades que creyesen lesionados sus derechos, ante la Delegación de Hacienda de esta provincia, haciéndolo público para general conocimiento y efectos prevenidos en el estatuto municipal y demás disposiciones posteriores.

Relación que se cita:

Cantimpalos
Sotillo
Duruelo
Laguna de Contreras
Pinilla Ambroz

Fiscalía de la Audiencia de Segovia

Don Luis Gredilla y Ubierna, Teniente Fiscal de la Audiencia de esta ciudad, en funciones de Secretario de la misma.

Certifico: Que por el Excelentísimo señor Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, con fecha dieciseis del actual, se ha acordado el siguiente nombramiento de Fiscal municipal propietario para el Juzgado que comprende la siguiente relación.

Partido judicial de Sepúlveda

DURATÓN: D. Cipriano Arnanz Burgueño.

Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, expido la presente, con el visto bueno del Señor Fiscal de esta Audiencia provincial en Segovia, a veinte de Septiembre de mil novecientos veintinueve. — El Secretario, Luis Gredilla. — V.º B.º: El Fiscal, Valverde.

Academia de Artillería

SUBASTA

Debiendo procederse a la venta en pública subasta de un caballo del ganado de desecho de este Centro, se hace presente que dicho acto tendrá lugar en la plazuela del mismo, a las once horas del día 3 de Octubre próximo; siendo el importe de este anuncio de cuenta de aquellos a quienes se adjudique dicho ganado.

Segovia, 21 de Septiembre de 1929. — El Comandante Jefe del Detall, Luis Mateo.

2703

Caja de Previsión Social de Castilla la Vieja (Burgos)

BALANCE que en relación con el técnico quinquenal del Instituto Nacional de Previsión presenta la Caja de Previsión Social de Castilla la Vieja.

ACTIVO	Pesetas	Pesetas
TESORERÍA		
Caja (existencia).....	25.620,75	
Bancos (saldos de cuentas).....	133.061,13	158.681,88
INVERSIONES FINANCIERAS		
Cartera de valores.....	3.675.322,88	
Bienes inmuebles.....	»	
Préstamos hipotecarios y pignoratícios.....	»	3.673.322,88
INVERSIONES SOCIALES		
Préstamos hipotecarios y pignoratícios.....	204.995,16	
Préstamos con garantías especiales.....	»	
Bienes inmuebles.....	»	204.995,16
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN, SU CUENTA DEL 30 POR 100 DE RECAUDACIÓN S.º O.		
Saldo.....	»	258.657,57
CAJAS COLABORADORAS		
Saldo.....	»	3.027,38
DELEGACIONES		
Saldo.....	»	16.474,57
MOBILIARIO E INSTALACIÓN		
Saldo pendiente de amortización.....	»	62.582,32
CUENTAS TRANSITORIAS		
Liquidación provisional del recargo ordinario S.º O.	23.590,18	
Liquidación provisional del recargo transitorio S.º O.	47.260,33	
Subsidio de maternidad, saldo a cobrar.....	»	
Del Instituto Nacional de Previsión.....	3.550	
Intereses y cupones vencidos y no cobrados.....	38.516,48	
Donativos ofrecidos y no entregados.....	3.666,73	
Varias cuentas transitorias.....	19.699,66	136.283,38
TOTAL DEL ACTIVO.....	»	4.514.025,14
VALORES NOMINALES		
Valores depositados.....	»	4.096.200
TOTAL.....	»	4.096.200

PASIVO	Pesetas	Pesetas
Capital fundacional.....	»	56.912,35
RESERVAS TÉCNICAS S.º O.		
Régimen obligatorio, pensiones vitalicias diferidas	1.469.127,56	
Régimen subsidiado de mejoras, pensiones vitalicias diferidas.....	229.487,33	
Régimen subsidiado de mejoras, pensiones vitalicias temporales diferidas.....	141,73	
Régimen subsidiado de mejoras, capitales-herencias	140,91	1.698.897,53
RESERVAS TÉCNICAS R.º L.		
Pensiones vitalicias diferidas, reaseguros aceptados y gestión conjunta.....	28.450,90	
Dotes infantiles, gestión conjunta.....	244.402,96	272.853,86
AFILIADOS DE EDAD INDETERMINADA (FONDO Z.)		
Saldo.....	»	163.780,34
FONDO DE CAPITALIZACIÓN (SEGUNDO GRUPO)		
Saldo.....	»	1.028.234,43
CUOTAS MEDIAS PATRONALES S.º O.		
Saldo pendiente de aplicación.....	»	848.242,74
IMPOSICIONES EN TRAMITACIÓN R.º L.		
Pensiones de retiro.....	18.260,90	
Dotes infantiles.....	75.240,75	93.501,65
RESERVA PARA FLUCTUACIÓN DE VALORES		
Saldo disponible.....	»	184.943,65
RESERVAS CONTINGENTES		
Saldo disponible.....	»	30.915,01
CUOTAS PATRONALES EN DEPÓSITO		
Saldo pendiente de aplicación por falta de afiliación	»	38.487,21
FONDO PARA GASTOS Y ATENCIONES SOCIALES		
Saldo disponible.....	»	56.820,85
INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN		
Su cuenta corriente.....	»	31.856,74
INPOSICIONES VOLUNTARIAS S.º O.		
Saldo pendiente de aplicación.....	»	4.806,34
HOMENAJES A LA VEJEZ		
Saldo pendiente de aplicación.....	»	3.772,44
SUMA EL PASIVO.....	»	4.514.025,14
VALORES NOMINALES		
Valores en depósito.....	»	4.096.200
TOTAL.....	»	4.096.200

Burgos, 31 de Diciembre de 1928.—El Jefe de Contabilidad, Luis Martínez.—V.º B.º: El Director-gerente, A. Rilova.

Según previene la disposición de 14 de Julio de 1921, reguladora del funcionamiento de las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional de Previsión, se ha constituido en la Caja de Previsión Social de Castilla la Vieja la Comisión revisora de su balance técnico y ha examinado las operaciones efectuadas por dicha Caja durante el período quinquenal de 1924-28, y como resultado del estudio llevado a cabo, certifica:

Que el balance, con sus anexos, presentado a esta Comisión refleja fielmente los saldos de las diferentes cuentas que integran la contabilidad de la Caja.

Que existe una rigurosa exactitud entre las cantidades recaudadas y las consignadas en registros y cuentas individuales, según se ha comprobado en varias operaciones elegidas al azar.

Que examinadas, de igual forma,

las liquidaciones practicadas en diversas cuentas individuales y comparadas con las que figuran en los «estados de reaseguro», no se ha encontrado omisión ni discrepancia alguna.

Asimismo se ha comprobado que los cálculos relativos a declaración de pensiones y dotes infantiles se han efectuado con sujeción a las tarifas en vigor, y por lo que se refiere a la distribución de bonificaciones del Estado, la Caja ha observado las disposiciones oficiales que regulan dicha aplicación, y por último,

Que son perfectamente efectivas las partidas que constituyen el activo disponible y el realizable, estando debidamente valorado y ajustado en cuanto a la clase y proporcionalidad de las inversiones, a lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes del reglamento general de 21 de Enero de 1921.

En consideración a todo lo expues-

to, la Comisión revisora se complace en consignar:

Primero. Que las reservas matemáticas para las pensiones, dotes y capitales reservados correspondientes a los regímenes obligatorio, mejoras y libertad subsidiada han sido calculadas según las normas técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Previsión, y que tanto aquéllas como las restantes cuentas que constituyen el pasivo responden rigurosamente a las obligaciones contraídas por la Caja de Previsión Social de Castilla la Vieja.

Segundo. Que el activo del balance examinado es perfectamente efectivo y se ajusta a las prescripciones vigentes en cuanto a clase, tipo de interés y proporcionalidad de las inversiones, estando estimadas en su verdadero y justo valor, y

Tercero. Que del examen de las operaciones sometidas a su estudio,

la Comisión revisora ha formado un juicio muy favorable de la administración y de la intensa labor realizada por esta Caja, consignándolo así, para satisfacción de su Consejo directivo, Director gerente, Jefes y demás personal que la integran.

Burgos, 13 de Septiembre de 1929.—El Presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Pascual Moliner Escudero.—El Presidente de la Cámara Agrícola, Angel Remacha y Cadena.—El Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Ricardo Díaz Oyuelos.—El Jefe de Contabilidad de la Delegación de Hacienda, Pedro Jiménez González.—El Administrador de la Caja general de Pensiones del Instituto Nacional de Previsión, Juan Pagés y Pagés.

IMPRENTA PROVINCIAL

Suplemento al BOLETIN OFICIAL

de la Provincia de SEGOVIA

Ministerio de Fomento

REAL ORDEN NÚM. 217.

Ilmo. Sr.: Redactado por la Dirección de su cargo el reglamento de aplicación de los Reales decretos de 22 de Febrero último y 21 del actual para la explotación de los servicios públicos de transportes por carretera, S. M. El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar dicho reglamento, que se publicará en la *Gaceta de Madrid*, a continuación de esta Real orden, para conocimiento y cumplimiento del mismo; debiendo entrar inmediatamente en vigor.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 22 de Junio de 1929.—Benjumea. Señor Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera.

REGLAMENTO

de aplicación de los Reales decretos de 22 de Febrero y de 21 de Junio de 1929 para la explotación de los servicios públicos de transporte por carretera

CAPITULO PRIMERO

definición y clasificación de los servicios que comprenden los transportes públicos por carretera

Artículo 1.º Se regirán por las normas del presente reglamento los servicios públicos de transportes que utilicen motor mecánico y circulen sin vía propia, por caminos ordinarios del Estado, Mancomunidades, Diputaciones o Ayuntamientos.

Los expresados servicios podrán ser de viajeros, de mercancías o mixtos. Artículo 2.º Se clasifican los servicios en regulares y discretionales. Los regulares se denominarán de la clase A, se otorgarán por escritura pública y serán aquellos que estén sujetos a un itinerario fijo, recorrido en su total trayecto de ida y vuelta una vez al día, por lo menos, circulando en las horas que previamente se autoricen.

Estos servicios tendrán siempre la obligación de transportar gratis la correspondencia pública y la de admitir viajeros y mercancías en la cantidad que permitan los medios de explotación de que se disponga, que serán los aprobados en sus concesiones, aumentados cuando las necesidades del tráfico lo hagan necesario a juicio de la Junta Central.

Artículo 3.º Los servicios que no reúnan las condiciones anteriormente mencionadas se llamarán discretionales, y sus clases y denominación serán las siguientes:

Clase B.—Servicios temporales de viajeros, mercancías o mixtos, con duración, itinerario y horarios que se fijarán al ser autorizados.

Clase C.—Servicios libres de viajeros, sin sujeción a itinerario ni horario previamente determinados.

Clase D.—Servicios públicos exclusivamente de mercancías, con horario indeterminado.

Artículo 4.º Los servicios de las

clases A y B podrán tomar y dejar viajeros, tanto individual como colectivamente, en los puntos en que se les autorice.

Los de la clase C se contratarán por vehículo completo, sin que puedan tomar o dejar viajeros con billete o pago individual, salvo los casos en que por no haber en el itinerario a recorrer establecidos servicios de las clases anteriores, sean autorizados al efecto.

CAPITULO II

De la ordenación de los servicios

I

Del Ministro de Fomento.

Artículo 5.º Corresponde al Ministro de Fomento:

a) El nombramiento de Vocales electivos designados o propuestos por las entidades correspondientes;

b) La modificación de la constitución de las Juntas Central y provinciales;

c) La celebración de contratos para recaudación del canon de conservación de carreteras y del destino a sufragar gastos de inspección que vengan obligados a satisfacer los que realizan servicios públicos de transporte por carretera;

d) Resolver en definitiva cuando un acuerdo de la Junta Central o de Comité sea suspendido por su Presidente;

e) Resolver los recursos que se presenten contra acuerdos de la Junta Central de Transportes o de la Dirección general de Ferrocarriles;

f) Resolver asimismo, en última instancia, los recursos de alzada y condonación de multas cuando su cuantía no exceda de 1.500 pesetas;

g) Acordar el rescate de las líneas de servicios regulares por causa de utilidad pública, y

h) El nombramiento y separación del Vocal-Secretario de la Junta Central, recayendo siempre en funcionario de plantilla de su Ministerio o de los Cuerpos auxiliares dependientes del mismo.

Artículo 6.º Corresponde asimismo al Ministerio de Fomento la alta inspección de los servicios, y en su virtud dictará las órdenes que estime oportunas para la mejor explotación.

II

De la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

Artículo 7.º Corresponderá a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, valiéndose de su Sección de Tráfico y de la Secretaría de la Junta Central:

a) La preparación de los expedientes relativos a concesiones de servicios regulares y sus incidencias, tramitándolos con arreglo a las disposiciones reglamentarias y pasando a la Junta Central, al Comité permanente de la misma y a las Juntas provinciales los asuntos en que hayan de intervenir.

b) Recibir de las Juntas provinciales las peticiones de servicios regulares encargándose de que se publiquen en la *Gaceta de Madrid* y *Boletines*

Oficiales de las provincias correspondientes los anuncios, informaciones y concursos a que dieren lugar.

c) Recibir asimismo los pliegos que se presenten en los concursos, pasándolos al Comité de la Junta Central una vez terminado el plazo de admisión.

d) Informar las peticiones de servicios discretionales que le remitan las Juntas provinciales, pasándolas después al Comité de la Junta Central.

e) Dictar, para la buena marcha de los servicios concedidos, las instrucciones, circulares y órdenes convenientes, como Jefe superior de la inspección, así como los acuerdos del Comité o de la Junta Central, entendiéndose al efecto con las Jefaturas de Obras públicas y con las Oficinas inspectoras de reconocimiento de automóviles de las provincias.

f) Resolver los recursos que se interpongan contra las multas impuestas por las Juntas provinciales, o por los Ingenieros Jefes de la Inspección, previo informe de la Junta Central, siendo su fallo la última instancia administrativa en las de cuantía que no exceda de 1.500 pesetas.

g) Entender en las reclamaciones del público a que dé lugar la explotación de los servicios, siempre que por su importancia hayan sido sometidas a su autoridad por los Ingenieros Jefes de la Inspección, tomando las medidas que sean de su incumbencia, o proponiendo al Ministro o a la Junta Central de Transportes las que deban adoptarse para remediar el mal denunciado.

h) Nombrar y separar, previo expediente, o por conveniencias del servicio, a los Secretarios de las Juntas provinciales, recayendo siempre el nombramiento en funcionarios dependientes del Ministerio de Fomento o de los Cuerpos auxiliares que tengan residencia en la Capital de la respectiva provincia.

i) Encargar inspecciones especiales a funcionarios dependientes de su autoridad, y

j) Fijar las remuneraciones que haya de percibir el personal de las Jefaturas de Obras públicas encargado de la inspección ordinaria de dichos servicios, previo informe del Comité de la Junta Central.

III

De la Junta Central de Transportes.

Artículo 8.º La organización y atribuciones generales de la Junta Central de Transportes son las consignadas en el artículo 1.º del Real decreto de 22 de Febrero de 1929, y su constitución, según el mismo y la Real orden de 30 de Mayo último, será la siguiente:

Presidente, el Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

Vocales natos: los Directores generales de Obras públicas y Comunicaciones, el Coronel del Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo, el Jefe superior de Industria, en el concepto de Delegado del Ministerio de Economía Nacional, y el Jefe de la Sección de Transportes del Ministerio de Hacienda.

Vocales efectivos: un representante

de cada una de las entidades siguientes: Patronato Nacional del Turismo, Patronato Nacional de Firms Especiales, Real Automóvil Club de España, Cámaras de Agricultura, Industria y Comercio y Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia; tres representantes de las Empresas de líneas de automóviles establecidas en España, elegidos por los concesionarios de servicios regulares a razón de un voto por cada 50 kilómetros de recorrido en explotación; otro del Consejo Superior de Ferrocarriles, y otro de las Empresas concesionarias de tranvías, que será propuesto por las mismas.

A falta del Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, presidirá las sesiones uno de los Vocales natos, por el orden en que quedan enumerados.

Tanto el Presidente como los Vocales natos podrán delegar su representación en un funcionario dependiente de su autoridad; en defecto de Vocales natos, presidirá el Delegado del Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

Los Vocales natos participarán por escrito al Presidente el funcionario en quien deleguen su representación, haciendo uso de la facultad que les otorga el citado artículo 1.º del Real decreto de 22 de Febrero de 1929.

Artículo 9.º Los Vocales electivos deberán tener nombramiento del Ministro de Fomento, previa propuesta de las entidades correspondientes, en la forma que se expresa a continuación:

En el último trimestre del año actual propondrán las entidades interesadas al Ministro de Fomento el que les ha de representar, durando su mandato dos años, al cabo de los cuales se procederá a nueva propuesta, la que también se formulará antes por vacante del designado en el cargo a petición de las entidades proponentes, petición que deberá formularse siguiendo el mismo procedimiento que para la designación.

Propondrán libremente su representación las entidades siguientes:

Patronato Nacional de Turismo;
Patronato Nacional de Firms Especiales;
Real Automóvil Club de España;
Cámaras de Agricultura, Industria y Comercio.
Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia, y
Consejo Superior de Ferrocarriles.

La elección de los tres representantes de las Empresas de líneas de automóviles se verificará por la Cámara de Transportes Mecánicos de Madrid en la forma prevenida en el Real decreto de 22 de Febrero de 1929.

La de los representantes de las Cámaras de Agricultura, Industria y Comercio, por sus Consejos o entidades superiores respectivas, en la forma usual para otorgar representaciones análogas.

El representante de las Empresas de tranvías lo propondrá la Asociación Nacional de Transportes por vía férrea, previo acuerdo de la Empresa adheridas.

Los actuales Vocales electivos se-

guirán desempeñando su cargo hasta la terminación del año 1929.

Artículo 10. La Junta Central actuará en Pleno o en Comité, según los asuntos que, detallados en el presente reglamento, correspondan a una o a otro.

Del Pleno de la Junta Central.

Artículo 11. La Junta Central se reunirá reglamentariamente, por lo menos, una vez cada mes, salvo el caso de que no hubiera asuntos en que deba entender, y, además, siempre que su Presidente lo estime necesario, o que una tercera parte de los Vocales lo soliciten. La convocatoria se hará por la Secretaría con ocho días, por lo menos, de antelación al de la celebración de la Junta, siempre que sea posible.

Para la celebración de sesiones en primera convocatoria será necesaria la presencia de la mitad más uno de los Vocales que la componen. En caso de no poder verificarse la sesión por falta de número se efectuará en segunda convocatoria al día siguiente, sea cualquiera el número de Vocales que concurran, haciéndose al efecto la oportuna advertencia en la citación.

Artículo 12. Al anuncio de convocatoria acompañará una relación de los asuntos a tratar en la sesión; terminados éstos, podrán tratarse otros con anuencia del Presidente pero sólo podrá recaer acuerdo en los que figuren en el orden del día, salvo en el caso de urgente resolución declarada así por la Junta.

Artículo 13. Los acuerdos de la Junta Central se tomarán en votación nominal, por unanimidad o por mayoría de votos. Si hubiera empate, decidirá el Presidente.

Artículo 14. Serán facultades de la Junta Central:

a) Otorgar las concesiones de servicios regulares que se tramiten, pudiendo unificar, modificar o rechazar, las peticiones que se formulen;

b) Acordar la caducidad de las concesiones de servicios regulares, previos los trámites reglamentarios, siendo necesario que el acuerdo que recaiga en estos casos tenga a su favor el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los Vocales presentes;

c) Proponer al Ministro de Fomento el rescate de las líneas, por causa de utilidad pública, tomando en consideración el valor del material, tráfico, productos, tiempo de concesión, etcétera, y

d) Informar las modificaciones reglamentarias que le ordene estudiar el Ministro de Fomento o el Director general de Ferrocarriles y proponer las que estime oportunas.

Del Comité permanente

Artículo 15. El Comité permanente, constituido en la forma que previene el artículo 1.º del Real decreto de 22 de Febrero de 1929, formará las ponencias de los asuntos en que ha de entender el Pleno, estando suscritas por dos Vocales, por lo menos.

Del Comité permanente tomará parte un representante de las Empresas de transportes, designado por la Junta Central, la que designará igualmente otro de la misma representación que actuará como suplente.

Artículo 16. Los pliegos presentados en los concursos para adjudicación de líneas de servicios regulares serán abiertos en presencia del Comité o de una Comisión de su seno.

Artículo 17. Será de competencia del Comité:

a) Resolver, previos los informes

reglamentarios, sobre la declaración de utilidad de los servicios regulares que se soliciten;

b) Autorizar o denegar las transferencias de las concesiones de servicios regulares;

c) Autorizar o denegar en definitiva las peticiones de servicios discrecionales;

d) Resolver las reclamaciones que se presenten en relación con los expedientes de concesiones o autorizaciones de servicios y sobre los servicios mismos;

e) Fijar, a propuesta del Presidente, los gastos de material de las Juntas y la remuneración del personal adscrito a los diversos organismos administrativos encargados de la tramitación y despacho de cuantos expedientes y asuntos se relacionan con la explotación de los servicios públicos de transporte por carretera, y

f) Examinar y aprobar en su caso los presupuestos y cuentas presentados por los diferentes servicios.

Del Presidente de la Junta.

Artículo 18. La representación de la Junta corresponderá a su Presidente, quien además despachará por sí, y auxiliado por la Secretaría, los asuntos gubernativos y toda la correspondencia oficial de la Junta y del Comité.

Artículo 19. Corresponderá al Presidente la ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta Central o su Comité, proponiendo al Ministro de Fomento las disposiciones oportunas que en cada caso procedan.

Presidirá las sesiones por sí o por delegación y someterá a discusión, que dirigirá, los asuntos que figuren en el orden del día o cuya urgente resolución se acuerde por la Junta.

Artículo 20. El Presidente, en uso de las facultades que le otorga el artículo 1.º del Real decreto de 22 de Febrero de 1929, podrá suspender provisionalmente los acuerdos del Pleno y del Comité hasta la sesión inmediata, en que se levantará o confirmará la suspensión, poniéndolo, en este segundo caso, en conocimiento del Ministro de Fomento, quien resolverá en definitiva.

El Presidente percibirá 40 pesetas de dieta por asistencia a cada sesión, tanto del pleno como de su Comité.

De los Vocales.

Artículo 21. Los Vocales, incluyendo al Secretario percibirán 30 pesetas de dieta por asistencia a cada sesión, tanto el Pleno como de su Comité.

Será obligatoria la asistencia a las sesiones, y la falta repetida de dicha asistencia por parte de los Vocales electivos más de seis veces consecutivas podrá motivar la indicación de la Presidencia a la agrupación que represente, por si estima conveniente su situación.

Del Vocal Secretario.

Artículo 22. Estará obligado a llevar los libros de actas y de establecimiento de servicios, que obrarán en su poder, así como debidamente clasificada toda la documentación que se refiera a las concesiones ya otorgadas definitivamente, datos estadísticos e incidencias que se produzcan en la práctica del servicio.

IV

De las Juntas provinciales.

Artículo 23. La constitución de las Juntas provinciales será la siguiente: Presidente, el Gobernador civil de la provincia.

Vocales natos, el Ingeniero Jefe de Obras públicas, el Delegado de Hacienda y el Administrador de Correos.

Vocales electivos, un solo Delegado por las Cámaras de Agricultura, Industria y Comercio; un representante de las Empresas de líneas de automóviles, elegido por los concesionarios de servicios regulares, a razón de un voto por cada 50 kilómetros de recorrido en explotación, y un representante de la Diputación Provincial o de la Mancomunidad de Diputaciones y el Secretario.

A falta del Gobernador civil, presidirá las sesiones uno de los Vocales natos, por el orden en que quedan enumerados.

Artículo 24. Los Vocales electivos deberán tener nombramiento del Gobernador civil, previa propuesta de las entidades correspondientes; esta propuesta, así como los deberes y atribuciones, se regirán en lo que les sea aplicable, por lo dispuesto anteriormente para los de la Central.

El único Vocal que representará a las Cámaras de Agricultura, Industria y Comercio, será designado de acuerdo entre las que existan legalmente constituidas en la provincia.

Artículo 25. En las provincias Vascongadas y Navarra será también Vocal de la Junta, el Ingeniero encargado del servicio de carreteras de la Diputación correspondiente.

Artículo 26. Las Juntas provinciales de Transportes, se reunirán reglamentariamente una vez cada mes, salvo caso de reconocida urgencia que obligue a otra reunión suplementaria.

La convocatoria se hará por la Secretaría, con ocho días de antelación, siempre que sea posible, a los de celebración de la Junta. Para la validez de ésta, será necesaria la presencia de la mitad más uno de los Vocales que la componen.

En el caso de no poder verificarse sesión por falta de número, se efectuará en segunda convocatoria al día siguiente, sea cualquiera el número de Vocales que concurran, haciéndose al efecto la oportuna advertencia en la citación.

Artículo 27. Los acuerdos de las Juntas provinciales se tomarán en votación nominal, por unanimidad o mayoría de votos, decidiendo, en caso de empate, el Presidente.

Artículo 28. Las Juntas provinciales, a propuesta de las Jefaturas de Obras públicas, corregirán con multas las faltas en que incurran los concesionarios de servicios regulares, los autorizados para servicios discrecionales y los que presten servicio público sin autorización de las Juntas de Transportes.

La cuantía de la multa será de 100 a 5.000 pesetas, que se harán efectivas en papel de pagos al Estado en el plazo máximo de quince días, a contar de la fecha en que reciban la notificación, salvo cuando fuera recurrido el acuerdo. En tal caso, este plazo se contará a partir de la notificación de la resolución que se adopte.

Será condición indispensable para poder formular el recurso, constituir en la caja general de depósitos, y a resultas de él importe total de la multa, que quedará en beneficio del Estado si la resolución es adversa.

Los acuerdos de multa habrán de tomarse con voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los Vocales presentes en la sesión, comunicando el acuerdo a la Junta central.

Artículo 29. Las Juntas provinciales se entenderán con la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera para la tra-

mitación de los asuntos que les corresponde en los expedientes de concesión de servicios regulares; a la misma remitirán, con su informe, las peticiones de autorización de los servicios discrecionales y darán conocimiento de los otorgados provisionalmente, dentro de las condiciones en que están facultadas para hacerlo, con arreglo al artículo 6.º del Real decreto de 22 de Febrero de 1929.

Del Presidente.

Artículo 30. Corresponderá la presidencia de las sesiones al Gobernador civil de la provincia, el que someterá a discusión los asuntos que figuren en el orden del día o cuya urgente resolución se acuerde por la Junta, a su propuesta o a la de tres Vocales, por lo menos. Corresponderá asimismo al Presidente la ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta y formular las propuestas correspondientes a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera.

El Presidente percibirá 25 pesetas de dieta por asistencia a cada sesión.

De los Vocales.

Artículo 31. Los Vocales, incluyendo al Secretario, percibirán 20 pesetas de dieta por asistencia a cada sesión.

Será obligatoria la asistencia a las sesiones, y cada uno de los Vocales, con la representación que ostente, será ponente en los asuntos que afecten a su especialidad.

Del Vocal Secretario.

Artículo 32. Estará obligado a llevar los libros de actas y de establecimiento de los servicios provinciales, figurando por separado los regulares y los discrecionales, así como los datos de itinerarios, horarios y tarifas. Agrupará por concesiones los datos estadísticos que estén obligadas las Empresas a remitir, con arreglo al artículo 4.º del Real decreto de 22 de Febrero de 1929.

Someterá al acuerdo de la Junta los expedientes de concesión de servicios regulares que deba informar, así como los de servicios discrecionales en que haya de informar o resolver, proponiendo al Presidente la adopción de las resoluciones necesarias para la ejecución de los acuerdos de aquélla.

Las Juntas provinciales celebrarán sus sesiones en los edificios que ocupen los Gobiernos civiles, y se instalarán en esos mismos edificios las Secretarías de aquéllas, y, en su defecto, en los locales que designe el Presidente.

CAPITULO III

De las concesiones de servicios regulares

I

De la tramitación

Artículo 33. El particular o Empresa que desee establecer un servicio regular de transporte de personas o mercancías, denominado de la clase A, deberá solicitarlo de las Juntas de Transportes de las provincias a que afecte el recorrido, presentando en cada una de ellas un ejemplar de la solicitud y de los documentos que se expresan a continuación:

1.º Memoria descriptiva de la línea, indicando la distancia total y las intermedias a los pueblos que atravesase y a los que, por su proximidad al camino, quedarán servidos; el tráfico probable que desarrollará, sea de viajeros o de mercancías o de ambos servicios, deduciendo de estos datos

la conveniencia y utilidad de su establecimiento.

2.º Croquis señalando pueblos atravesados y próximos y distancias que los separen.

3.º Puntos de origen, término o intermedios de paradas fijas donde se compromete a tener local adecuado e independiente de otros servicios para el de viajeros, equipajes o mercancías, acompañando también croquis en planta de estos locales, precisando su capacidad y condiciones.

4.º Número de carruajes de viajeros y camiones de mercancías de que han de disponer, siendo nuevos la mitad por lo menos, e indicando sus características con todos los detalles que para la circulación de vehículos de segunda y tercera categoría exige el reglamento de 16 de Junio de 1926, y acompañando esquema de bastidores y carrocerías con sus explicaciones de carácter técnico.

5.º La tarifa de percepción por viajero y kilómetro, exceso de equipaje o tonelada de mercancía, también por kilómetro.

6.º Servicio mínimo diario de viajes que han de establecer y volumen también mínimo de mercancías que se comprometen a admitir diariamente.

7.º Presupuesto aproximado de gastos de establecimiento.

8.º En la provincia donde tenga mayor recorrido presentará también justificante de ingreso en la Caja general de Depósitos de una fianza de cien pesetas por kilómetro o fracción, haciendo referencia del mismo en los ejemplares presentados en las demás provincias a que afecte el recorrido.

Artículo 34. Las Juntas provinciales, con un sucinto informe relativo a la utilidad del servicio y condiciones del proyecto, remitirán las peticiones a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

Artículo 35. La Dirección, reunidas las peticiones que integren el proyecto, abrirá un extracto de Secretaría, en que haga figurar los documentos recibidos, y pasará el expediente al Comité permanente de la Junta Central.

Artículo 36.—El Comité de la Junta Central, si acuerda que el servicio no es de utilidad pública, lo desechará, comunicándolo así al interesado.

Si estima que procede tomarlo en consideración, lo devolverá a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, para que se proceda a la información pública correspondiente, y una vez efectuada ésta, resolverá en definitiva si el servicio es o no de utilidad pública.

El acuerdo será motivado, y contra el mismo sólo cabrá recurso de alzada ante el Ministro de Fomento.

La toma en consideración no supone la declaración de utilidad.

Artículo 37. La citada Dirección redactará el oportuno anuncio, para su publicación en la *Gaceta de Madrid* y en los *Boletines Oficiales* de las provincias interesadas.

El anuncio habrá de expresar: nombre del peticionario, descripción del proyecto presentado e indicación de las oficinas de las Juntas provinciales y horas en que el público podrá examinar el proyecto.

Este estará expuesto al público por un plazo de treinta días naturales, contados desde la publicación del anuncio en la *Gaceta de Madrid*, y durante ese tiempo podrán presentarse, por escrito, en las expresadas ofi-

cinas de las Juntas provinciales, cuantas reclamaciones, observaciones o proyectos en competencia se estime oportuno.

Los que presenten proyecto en competencia lo harán en la misma forma que el peticionario, y los que pretendan ejercer derecho de tanteo presentarán escrito, con la explicación clara que acredite la razón que les asiste y el croquis en que demuestren el fundamento de su demanda, entendiéndose que los que dejen de hacer esta manifestación se les tendrá por renunciados sus derechos; es decir que para poder hacer efectivo un presunto derecho de tanteo es condición indispensable la de que acuda el interesado espontáneamente a la información pública de que se trata.

Si el tanteo es pretendido por una Compañía de Ferrocarriles, concretará las ventajas que ofrece, figurando entre ellas la combinación entre el nuevo servicio y su ferrocarril u otras de reconocida utilidad pública.

Unos y otros acompañarán a su petición un resguardo del depósito de la misma cantidad y en igual forma que el peticionario.

Artículo 38. Terminado el plazo de información, las Juntas provinciales, previos los informes que estimen oportunos, y con los obligados del Ingeniero Jefe de Obras públicas y de la oficina de reconocimiento de automóviles de la provincia, emitirán el suyo, remitiendo lo actuado a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

Artículo 39. La indicada Dirección consignará en el extracto de Secretaría los documentos aportados, y con éstos remitirá el expediente al Comité de la Junta Central.

El Comité decidirá entonces respecto a la declaración de utilidad, y si la acuerda y el proyecto afecta a algún ferrocarril o tranvía, a propuesta del Vocal representante del Consejo Superior de Ferrocarriles o del de Empresas de tranvías, pasará el expediente a informe del organismo correspondiente, quien lo emitirá en el término de treinta días, salvo mayor plazo, si procede, por causa justificada, a juicio de la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

Evacuado este trámite, o después de declarada la utilidad en otro caso, el Comité formulará la ponencia al Pleno para la resolución definitiva.

Si son varios proyectos los presentados y entre ellos existe alguno de Empresa de ferrocarril o tranvía, la Dirección general dictaminará si a él se le debe otorgar el derecho de tanteo a que se refiere el artículo 5.º del Real decreto de 22 de Febrero de 1929, consignando dicho dictamen en el extracto del expediente, y devuelto al Comité de éste elevará su ponencia al Pleno de la Junta Central.

No existiendo entre los proyectos ninguno presentado por Compañías de Ferrocarriles o tranvías, o desechados éstos, elegirá el Comité el más conveniente y elevará su ponencia al Pleno; si además de uno o varios proyectos se presenta una sola entidad con derecho de tanteo, después de determinado el mejor en la forma expresada, la Junta Central ofrecerá la adjudicación al que ostente dicho derecho de tanteo.

Cuando a la información no acudan Empresas de ferrocarriles o tranvías o se acuerde que no les corresponde derecho de tanteo a nin-

guna de ellas, y sea más de un solicitante el que debe de disfrutarlo, se anunciará un concurso restringido entre el autor de la primera proposición, el de la declarada más ventajosa y los que tengan derecho de tanteo.

El concurso tendrá por base la proposición más ventajosa, y sus características servirán para que el Pleno de la Junta Central redacte el pliego de condiciones particulares de la concesión, previa ponencia de su Comité.

Artículo 40. La licitación se anunciará expresando el objeto del concurso y fecha y horas en que comenzará y terminará la admisión de pliegos en la Secretaría de la Junta, y el día, hora y sitio en que haya de celebrarse la apertura y demás circunstancias del acto.

Dicho anuncio se publicará con treinta días de antelación en la *Gaceta de Madrid* y en el *Boletín Oficial* de la provincia o provincias a que afecte el servicio que se concursa, dando un plazo de treinta días naturales, a partir del en que se publique en la *Gaceta* para la presentación de pliegos por las entidades que tengan derecho a tomar parte en él, cuyos nombres figurarán en el anuncio, así como la indicación de que el pliego de condiciones que sirve de base estará de manifiesto para que los interesados puedan consultarlo a las horas de oficina, en la Sección de Tráfico de la expresada Dirección general.

En casos urgentes, podrá el Presidente de la Junta Central de Transportes acortar el plazo expresado, sin que nunca baje de quince días.

Artículo 41. Cuando el servicio corresponda a las islas Baleares o Canarias, el anuncio se publicará con un plazo mínimo de treinta y sesenta días, respectivamente, debiendo efectuarse el concurso, y, por tanto, la apertura de proposiciones, a los cinco y diez días de finalizar los respectivos plazos. Estos comenzarán a contarse desde la fecha de la inserción de los referidos anuncios en los *Boletines Oficiales* de las provincias insulares indicadas.

Artículo 42. La licitación se hará por pliegos cerrados, a los que se acompañará el justificante de haber consignado en la Caja general de Depósitos una fianza igual a la constituida por el autor de la proposición inicial del expediente.

Las solicitudes se extenderán en papel sellado de la clase que corresponda, e irán dirigidas al Presidente de la Junta Central de Transportes, redactándose las proposiciones de acuerdo con el modelo oficial.

Artículo 43. Terminado el plazo para la admisión de pliegos, la Secretaría pasará al Comité de la Junta Central los presentados, con los resguardos correspondientes, acompañados de una nota expresiva del número de unos y otros y de la fecha de su presentación, con las observaciones que estime oportuno hacer. Se conservarán en la Secretaría hasta la hora de la celebración del concurso. Un duplicado de la nota o relación de los pliegos del concurso se entregará al Presidente de la Junta Central de Transportes.

Artículo 44. La Secretaría, al recibir los pliegos, consignará los días y horas de la presentación, señalando a cada pliego un número de orden y entregando recibo del mismo y del resguardo de la fianza al interesado, aunque no lo pidiese.

Los pliegos deberán presentarse

cerrados a satisfacción del que los presente, y firmados por el concursante, como asimismo el sobre, haciendo constar en éste que se entregan intactos, o las circunstancias que para su garantía juzgue convenientes el interesado. Una vez entregados los pliegos, no se podrán retirar, pero sí podrá presentar varios el mismo licitador, dentro del plazo y con arreglo a las condiciones anunciadas. Cuando un concursante presente varios pliegos, bastará que consigne en las proposiciones posteriores a la primera que a la presentación de ésta exhibió la cédula personal, que deberá reseñarse al margen de su pliego; pero en ningún caso prescindirá del resguardo del depósito, que habrá de constituir, por separado, en garantía de cada una de las proposiciones que formule.

Artículo 45. Si no se hubiese presentado más que una sola proposición, y el autor de ésta aceptase las condiciones impuestas por el pliego que sirvió de base al concurso, se le otorgará la concesión en las condiciones estipuladas en el citado pliego, y las generales de este reglamento, con las mejoras que hubiese ofrecido en la proposición.

Artículo 46. En el caso de haberse presentado varios licitadores, se abrirán públicamente los pliegos en el día, hora y sitio designados en el anuncio. Constituido el Comité permanente de la Junta Central, o la Comisión de su seno que designe al efecto, antes de abrirse los pliegos podrán los autores o representantes legales manifestar las dudas que se les ofrezcan o pedir las explicaciones necesarias, en la inteligencia de que una vez abierto el primero de ellos, no se admitirá observación ni explicación alguna que interrumpa el acto.

Artículo 47. Reunido el Comité o su Comisión, se comprobará, con la presencia del Notario, el número de pliegos presentados, y el Presidente anunciará que va a procederse a su apertura, lo que se efectuará seguidamente, siendo desechados todos los que no se hallen sustancialmente conformes con el pliego de condiciones y modelo de proposición, o no se presenten acompañados de sus correspondientes resguardos del depósito efectuado.

Artículo 48. Terminada la lectura de los pliegos, se levantará acta, haciendo constar las observaciones formuladas y los pliegos presentados con sus principales características, dando por terminado el acto.

Artículo 49. Los pliegos admitidos serán estudiados por el Comité permanente, formulando en su día la oportuna propuesta para la resolución del Pleno de la Junta Central de Transportes.

Artículo 50. Hecha la adjudicación, el Secretario devolverá a los licitadores, o a sus representantes, debidamente autorizados, los resguardos de las fianzas correspondientes a sus proposiciones, quedando retenidos en la Secretaría todos los documentos pertenecientes al autor de la proposición declarada más ventajosa y las proposiciones de los demás licitadores.

La fianza de aquél será elevada a definitiva, previo aumento de la misma en la mitad de la provisional, si la línea no excede de 130 kilómetros; el exceso de esta longitud tendrá un aumento del 15 por 100 de la expresada fianza provisional.

El interesado entregará al Secretario de la Junta Central el resguardo correspondiente a esta fianza antes de

recibir el título de otorgamiento de la concesión.

Artículo 51. La concesión se otorgará, mediante escritura pública, por un plazo de veinte años, como máximo; pero quedando siempre sujeta a los casos de caducidad consignados en las disposiciones vigentes y a los recursos que puedan entablarse, debiendo publicarse las concesiones en la *Gaceta de Madrid* y en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o provincias interesadas.

De la escritura notarial se obtendrá una copia autorizada y las simples necesarias, las cuales se distribuirán de la manera siguiente: la copia autorizada para unirla al expediente de concesión, que obrará en el archivo de la Secretaría de la Junta Central, y una copia simple para cada una de las provincias a que afecte la concesión.

Los gastos que origine la escritura y sus copias, así como los anuncios de información y concurso, serán de cuenta del concesionario, haciéndose así constar en los pliegos de condiciones que se formulen.

Será también de cuenta del concesionario los gastos que ocasione el reconocimiento y autorización de apertura de la línea al servicio público, previas las formalidades reglamentarias.

Artículo 52. El concesionario estará obligado a abrir la línea al servicio público en el plazo de tres meses, a contar del otorgamiento, siendo este plazo prorrogable por otros tres, si se alega causa justificada, a juicio de la Junta Central.

Artículo 53. Si como resultado del concurso, y con aplicación de las normas que se expondrán en el párrafo tercero del presente capítulo, se aprecia que la mejor proposición no es de entidad que ostente derecho de tanteo se ofrecerá la concesión al que lo tenga, si es uno solo; si son varios tendrá preferencia la Empresa a quien corresponda la línea de servicio regular que motivó el reconocimiento del derecho de tanteo, teniendo en cuenta el número de viajeros transportados y el producto que resulte de multiplicar los años de servicio por los kilómetros recorridos diariamente con arreglo a su autorización.

Si fuese declarada como más ventajosa, siguiendo las mismas normas establecidas en el citado párrafo tercero, alguna de las proposiciones presentadas por Empresa que tenga reconocido el derecho de tanteo, se le adjudicará la concesión sin más trámites.

Artículo 54. Se podrán establecer servicios públicos de viajeros y mercancías de las clases A y B, independientemente de las concesiones ya otorgadas de ambos servicios, cuando el concesionario no atienda el total tráfico normal de la línea, y a juicio de la Junta Central, previo informe de las provinciales correspondientes, se haya evidenciado la necesidad de crear el nuevo servicio y después de haber requerido sin resultado al concesionario o concesionarios de las líneas en explotación para que refuerzen el servicio en forma que satisfagan las necesidades que la Junta Central estime conveniente atender. Dicha Junta podrá tomar estos acuerdos por disposición ministerial, por iniciativa propia o a petición de los particulares o entidades interesadas, siguiéndose para las concesiones las normas fijadas anteriormente.

El establecimiento de estos servicios llevará consigo la libertad del viajero de utilizar en la parte común

del recorrido los vehículos de uno u otro servicio que estime conveniente, quedando obligado el nuevo concesionario, cuando se utilicen los suyos, a abonar al primitivo la cantidad que ambos acuerden por viajero y que apruebe el comité permanente de la Junta Central. Si no hubiera acuerdo, será ejecutiva la que fije el referido Comité.

Artículo 55. No se otorgarán concesiones de servicios regulares para distancias inferiores a 20 kilómetros.

Por excepción, la Junta Central podrá otorgar directamente concesiones que no lleguen a 20 kilómetros, cuando, a su juicio, y previo informe de la provincial, éstas completen líneas o redes de importancia; en tal caso, las características de las líneas agregadas serán las mismas de las concesiones que las justifiquen. Si son varios los concesionarios que se crean con derecho a la línea complementaria, decidirá la Junta Central, después de oír a los interesados.

Artículo 56. En una zona que no podrá exceder de 30 kilómetros en las poblaciones de Madrid y Barcelona, partiendo de la Puerta del Sol en la primera, y de la Plaza de Cataluña en la segunda, los servicios regulares otorgados serán compatibles con otros de la misma clase o discrecionales, disfrutando todos, en el trayecto común, de los beneficios de la explotación, con arreglo a la extensión del servicio de cada uno. Análoga norma podrá establecerse, por excepción, en longitudes más reducidas en otras poblaciones en que la Junta Central lo estime conveniente, previo informe de la provincial. Estos acuerdos habrán de tener a su favor el voto de las dos terceras partes, por lo menos, de los Vocales presentes.

II

Del derecho de tanteo.

Artículo 57. En la propuesta de una línea de servicio regular tendrán derecho de tanteo, además del concedido a Compañías de Ferrocarriles y Tranvías:

a) Los concesionarios de líneas de la clase A con origen y término iguales a la propuesta.

b) Los concesionarios de líneas de la clase A que tengan trayecto común en una extensión superior al 25 por 100 del total recorrido de la línea que se trate de establecer. Para la preferencia, si son varios, se tendrá en cuenta el número de viajeros transportados y el producto que resulte de multiplicar los años de servicio por los kilómetros recorridos diariamente con arreglo a su autorización.

c) Los que tuvieran establecido un servicio normal diario (debidamente comprobado por la Inspección, en todo o en parte del recorrido propuesto, no menor de un tercio, con un año, como mínimo, de anticipación a la petición del servicio regular, siempre que tengan autorización legalmente concedida).

III

De los elementos que influyen en la mejora de un proyecto inicial de servicio regular de transportes.

Artículo 58. Tarifas.—Las tarifas de concesión tendrán el carácter de máximas, y sus tipos no podrán exceder, para viajero y kilómetro, de 0,20 pesetas en primera clase, 0,16 en segunda y 0,12 en tercera, con un aumento del 10 por 100 en asientos de berlina y cinco pesetas tonelada-kilómetro por exceso de equipaje.

Podrán admitirse sólo dos clases de las indicadas: primera y segunda o

segunda y tercera, proscribiéndose, en general, la adopción de una clase única, salvo casos muy justificados.

Las proposiciones presentadas con tarifas cuyo tipo medio de baja, con relación a la propuesta inicial, sea superior a un 25 por 100, tendrán un 25 por 100 de aumento en la fianza, tanto en la provisional como en la definitiva.

El exceso de baja que rebase el 50 por 100 de la mencionada proposición inicial no se tendrá en cuenta al apreciar las ventajas de la propuesta si no es consecuencia de algún servicio combinado o se justifique técnicamente y se duplique la fianza.

Artículo 59. Material.—El material mínimo de transporte admisible se computará a razón de un coche de capacidad no inferior a doce asientos por cada 25 kilómetros que tenga de recorrido la línea solicitada, partiendo de un mínimo absoluto de tres coches. Para apreciar la mejora en el material habrá de tenerse en cuenta la cantidad y la bondad del ofrecido, tanto en lo que se refiere a sus características de orden técnico como a la amplitud y comodidad proporcionada a los viajeros.

Para el transporte de mercancías se apreciarán la capacidad, resistencia y naturaleza apropiada de los vehículos que se propongan. En igualdad de condiciones; será preferido el material de producción nacional, ajustándose a las disposiciones vigentes de protección a la industria.

Artículo 60. Canon.—El canon por conservación del camino que han de abonar las empresas explotadoras en ningún caso podrá ser inferior a medio céntimo por tonelada y kilómetro de recorrido.

El tonelaje se apreciará sumando al peso del vehículo la mitad de su carga útil, computada en los vehículos para viajeros a razón de 75 kilogramos por persona, con su equipaje de mano, despreciándose las fracciones de tonelada que no excedan de 500 kilogramos y contándolas como unidad cuando pasen de esta cifra.

El aumento ofrecido se expresará siempre en la misma forma de tonelaje y kilómetro.

Artículo 61. Instalaciones en los puntos de parada.—Se tendrá en cuenta las ventajas ofrecidas en número de locales, situación de los mismos en las poblaciones, comodidades ofrecidas para despacho y espera de viajeros, así como la capacidad y conveniente disposición de las instalaciones para mercancías.

Artículo 62. Frecuencia y extensión del servicio.—Se apreciarán estas importantes condiciones de la explotación en los dos casos de que el servicio comprenda únicamente transporte de viajeros y correspondencia o abarque también el de mercancías, teniendo en cuenta el número de recorridos diarios completos de ida y vuelta que se ofrezcan, relacionados con la capacidad de los coches que los han de efectuar y la cantidad de mercancías que se obliguen a transportar diariamente.

Artículo 63. Facilidades para el rescate.—Se considerarán como tales cuantas tiendan a simplificar y acortar los trámites del rescate, y especialmente la declaración de aceptar como buena la anualidad que se fije con sujeción a las normas de este reglamento, renunciando al nombramiento de Peritos.

Artículo 64. La influencia que puedan ejercer los elementos de que tratan los artículos precedentes en la apreciación de la bondad o mejora de

una propuesta inicial, será apreciada por la Junta Central.

Cuando se trate de comparar, en los concursos restringidos, propuestas formuladas por las entidades que tienen reconocido el derecho de tanteo, se considerará como elemento a tener en cuenta en cada una de ellas el número de viajeros transportados y el producto que resulte de multiplicar los años de servicio por los kilómetros recorridos diariamente con arreglo a su autorización.

En todo caso podrá recurrirse ante el Ministro de Fomento.

IV

De los deberes, derechos y responsabilidades de los concesionarios

Artículo 65. Podrán ser concesionarios de los servicios de transportes en vehículos de motor mecánico todos los españoles que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y las Sociedades y Compañías españolas legalmente constituidas.

Los representantes de las empresas concesionarias que pertenezcan a la Junta Central o provinciales de Transportes, así como los de los ferrocarriles y tranvías, podrán presentar pliegos para obtener nuevas concesiones; pero en ningún caso tomarán parte en la deliberación ni en las votaciones de la Junta en que se trate de la adjudicación de aquéllas.

Artículo 66. El concesionario de un servicio regular tiene derecho a la explotación del transporte público en la línea durante el tiempo y en las condiciones de su concesión, debiendo de cesar al comienzo de su explotación los servicios discrecionales de la clase B que en todo o en parte del recorrido vengán funcionando, con las excepciones contenidas en el capítulo siguiente.

No obstante, para dar cumplimiento al artículo 5.º del Real decreto de 20 de Febrero de 1926, si, por efecto de ese cese, quedaran sin servicio algunos pueblos relacionados con la línea concedida, el concesionario queda obligado a servirlos en la forma que se determine.

Artículo 67. Los concesionarios vendrán obligados a efectuar el transporte gratuito de la correspondencia entre los puntos afectos a la línea o líneas de su concesión, considerándose comprendidos en la denominación de correspondencia todos los objetos que hoy conduce el correo y los que en lo sucesivo se acuerde sean admitidos para la circulación del mismo y se consignen en la tarifa de Correos. Entregará todos los dirigidos a cada pueblo del tránsito y observará, para su recepción y entrega, las prescripciones vigentes y las que se dicten durante el período de concesión.

No obstante lo dispuesto anteriormente, los concesionarios sólo vendrán obligados al transporte de paquetes postales en número que no comprometa al desenvolvimiento normal de la conducción de la demás correspondencia y prestación de los servicios diversos propios de la concesión, no estando obligado a admitir en cada viaje más de 20 por 100 de su carga útil. En el caso de afluir número considerable de paquetes postales, que no puedan ser transportados por una sola expedición, se cursarán por las sucesivas hasta conseguir el transporte total de aquéllos.

Si la Administración diera un impulso o extensión mayor al servicio de paquetes postales, que actualmente está limitado a las relaciones de la Península con las islas Baleares, Ca-

narias y Africa, vendrá obligado a concertar las condiciones en que dichos objetos habían de ser transportados por los concesionarios.

Artículo 68. El concesionario será responsable de la correspondencia certificada, cartas con valores declarados, objetos asegurados, valores en metálico, envíos contra reembolso, giros postales y paquetes postales, de cuyos objetos se hará cargo el concesionario o conductor, bajo recibo y nominalmente, no cesando su responsabilidad hasta tanto que justifique haberlos entregado con igual formalidad a un empleado, Agente postal, concesionario o contratista. A este efecto, los conductores deberán llevar un libro, en el que a notarán dichos objetos al hacerse cargo de ellos, y recogerán el recibo de los empleados o Agentes a quienes los entreguen.

La responsabilidad pecuniaria que alcanzará al concesionario, en los casos en que reglamentariamente proceda, será la de 20 pesetas por la pérdida de cada certificado del interior del Reino sin declaración de valor; 50 francos si se trata de certificados de servicio internacional, o igual cantidad a la que el Estado haya de abonar por extravío o sustracción del contenido de las cartas con valores declarados, objetos asegurados, valores en metálico, envíos contra reembolso y giros postales. Si la conducción transportase en paquetes postales ordinarios o con declaración de valor, por la pérdida, sustracción o avería de cada uno tendrá que abonar el concesionario una cantidad igual a la que el Estado haya de indemnizar. La responsabilidad pecuniaria a que se refiere el apartado anterior no excluye las demás responsabilidades que administrativa o judicialmente corresponda exigir por el hecho que motivó la primera.

Artículo 69. Los concesionarios tendrán asimismo obligación de conducir gratuitamente, en asientos de primera, a los miembros de la Junta Central y de las provinciales de Transportes, así como al personal encargado de la Inspección, con previo aviso y sin exceder de un asiento por cada diez o fracción.

Artículo 70. La Dirección general de Comunicaciones podrá utilizar, para la comunicación postal de los pueblos afectos a una línea todos los servicios de transporte regulares establecidos en la misma, con arreglo a las disposiciones vigentes, salvo en los rápidos y en los discrecionales.

Artículo 71. Cuando los vehículos no arranquen de la puerta de la Oficina de Correos del punto de origen de la línea o no rindan el viaje en la de término, los concesionarios habrán de establecer servicios de enlace o de transporte adecuado entre las Oficinas postales indicadas y la Casa Administración del concesionario o local de donde arranquen o rindan su viaje los vehículos, efectuando, por medio de estos últimos transportes, el de la correspondencia que haya de recogerse o entregarse en las Administraciones de Correos, debiendo efectuarlo con la anticipación imprescindible, simultaneando las operaciones del correo con las del pasaje, a fin de que, recibido aquél en el punto de arranque de los automóviles, éstos salgan sin dilación alguna después de la llegada del correo, y en todos los casos habrá de organizar este servicio en forma de máxima garantía respecto de la custodia de la correspondencia.

Las Empresas vendrán obligadas a

entregar y recibir la correspondencia en las oficinas de tránsito inmediatas a la carretera de su línea, así como la de las carterías y peatones correspondientes a aquéllas.

Artículo 72. Será responsable el concesionario de la conservación en buen estado de las maletas, sacos o envases en que se remita la correspondencia, preservándolo de la humedad y deterioro. También será responsable de cuantas faltas cometan sus dependientes en el desempeño del servicio. Los agentes de los concesionarios encargados de la recepción, conducción y entrega de la correspondencia habrán de ser, naturalmente, mayores de diez y ocho años y habrán de saber leer y escribir. El conductor del coche no podrá ser menor de veintitrés años.

Artículo 73. Cuando por causa fortuita se interrumpa el servicio de una expedición, estará obligado el concesionario a arbitrar los medios oportunos, y a su costa, para que la correspondencia llegue a su destino con la mayor brevedad posible, impetrando, si fuese necesario, el auxilio de las Autoridades.

Para mayor facilidad en el cumplimiento del servicio, en el caso a que se refiere el inciso anterior, los concesionarios o sus Agentes encargados de aquél irán provistos del «Vaya», expedido por la Administración de Correos del punto de origen de la línea, y tendrá derecho al uso de aparatos de telefonía de campaña, utilizando al efecto las líneas telegráficas o telefónicas que pertenezcan al Estado o a la Compañía Telefónica Nacional, concesionaria de esta clase de comunicaciones.

Artículo 74. Los concesionarios habrán de someterse también a las condiciones que para el transporte de su peculiar servicio tienen establecidas los Ministerios de Ejército y Marina con las Compañías de ferrocarriles en aquellas líneas en que no exista posible comunicación ferroviaria. Esta obligación se entiende para los transportes oficiales con lista de embarque.

Artículo 75. Las exenciones del impuesto de portazgo, pontazgos o barcajes que correspondan al correo se ajustarán a las mismas prescripciones que rigen para regularlas en los casos de contratación del servicio de transporte de la correspondencia pública, y serán de cuenta del concesionario en todos los casos en que dichas exenciones no sean aplicables.

Artículo 76. El concesionario de un servicio de transporte en vehículos con motor mecánico podrá transferir su concesión, siempre que el Comité permanente de la Junta Central lo estime conveniente; pero esa transferencia de concesión no podrá efectuarse antes de transcurrido un año en la prestación del servicio cuando la concesión se haya obtenido en concurso, entendiéndose que quien sustituya al referido concesionario en sus derechos también le sustituirá en todas sus obligaciones y responsabilidades.

La transferencia de concesión dará origen al otorgamiento del correspondiente contrato de traspaso y subrogación, en el que deberá constar, por copia literal, el resguardo del depósito de la fianza constituida por el concesionario o la transferencia del cedente a favor de aquél, depósito que continuará, en tal caso, sujeto a las responsabilidades de la concesión. El otorgamiento de cesión habrá de hacerse con las mismas formalidades se-

guidas en el caso del concurso, y, por consiguiente, con arreglo a lo establecido en este Reglamento.

Toda solicitud de traspaso deberá estar firmada por el cedente y concesionario, haciendo constar en ella el compromiso de éste respecto a subrogarse en todas las obligaciones de aquél.

Si después de autorizado el traspaso no se llevara a efecto dentro del plazo de un mes, a contar de la fecha de la notificación a los interesados, se considerará virtualmente nula aquélla autorización.

El nuevo concesionario no podrá encargarse del servicio en tanto no cumpla con lo preceptuado en este artículo.

Artículo 77. El concesionario incurrirá en falta por retraso en las expediciones que no haya sido motivado por causa de fuerza mayor; por el deterioro, extravío o sustracción de la correspondencia ordinaria, certificada, asegurada, giros postales y paquetes postales, y, en general, por toda contravención a lo dispuesto en el reglamento para el régimen y servicio del ramo de Correos. Esta responsabilidad habrá de serlo sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes y de la responsabilidad criminal que se deduzca.

Se considerarán como graves las faltas que afecten a la seguridad de los viajeros y de la correspondencia y los casos de desobediencia grave a las Autoridades. La reincidencia en estas faltas será fundamento bastante para que la Junta Central acuerde la caducidad de la concesión siendo responsable el concesionario de los perjuicios que al Estado se originen.

Toda contravención o falta cometida por los concesionarios en la prestación del servicio postal se regulará, en orden de la responsabilidad exigible cuando haya lugar, con arreglo a las disposiciones contenidas en el Reglamento para el régimen del servicio del ramo de Correos y demás disposiciones vigentes en dicho ramo. Las faltas leves en que incurrir los concesionarios en este servicio no serán computables para elevar estas faltas sucesivas a la consideración de graves.

Artículo 78. Los concesionarios incurrirán también en falta por infracción de los preceptos consignados en el Reglamento para la circulación de vehículos con motor mecánico por las vías públicas de España y de la circulación urbana e interurbana. Las faltas aludidas se corregirán con arreglo a lo dispuesto en los expresados Reglamentos.

Artículo 79. El derecho de tanteo consignado en el artículo 18 del Real decreto de 4 de Julio de 1924 se establecerá de manera explícita en los pliegos de condiciones económicas que sirvan de base a las subastas de acopio extensión y afirmado de las carreteras, cuando el Ministerio de Fomento no conceptúe que pudiera determinar perjuicio en el servicio público. Cuando en las condiciones económicas citadas nada se exprese sobre este extremo, se entenderá que los concesionarios de líneas no tienen preferencia alguna con relación a otros licitadores.

V

Del término de las concesiones.

Artículo 80. Las concesiones de servicios regulares quedarán extinguidas por reversión del Estado, por caducidad o por rescate:

a) *Reversión.*—Al término del plazo de la concesión, si excede de diez años, pasará a ser propiedad del Esta-

do el material y demás elementos de la explotación, que habrá de entregarse en perfecto estado de funcionamiento y conservación, a cuyo efecto, en los dos años que precedan al término de la concesión, el Gobierno tendrá derecho a retener los productos líquidos de la explotación, si la Empresa descuidase el entretenimiento de los expresados elementos.

Al finalizar la concesión y decidido que el servicio continúe mediante concurso, el concesionario que cesa tendrá el derecho de tanteo a su favor, si ha cumplido satisfactoriamente las condiciones de su concesión.

b) *Caducidad.*—Procederá la declaración de caducidad de la concesión:

1.º Si no se abre la línea al servicio público en el plazo fijado al efecto.

2.º Por infracción reiterada de las condiciones aceptadas por el concesionario o de las disposiciones legales o reglamentarias, dictadas o que se dicten para regular este servicio.

3.º Por la falta de servicio durante diez días consecutivos o quince mensuales alternados, salvo caso de fuerza mayor.

4.º Por reincidencia en falta grave, considerándose como tales las que se expresan en el artículo 77. La caducidad llevará consigo la pérdida en beneficio de la Administración de la fianza constituida.

c) *Rescate.*—En el pliego de condiciones particulares de la concesión figurará una cláusula en virtud de la cual el Estado se reserve la facultad de rescatar la línea por causa de utilidad pública.

Artículo 81. El rescate será acordado por el Ministerio de Fomento. Las normas que han de servir de base para indemnizar al concesionario por los perjuicios que se le ocasionen serán las siguientes:

Material.—Para tasar el material móvil existente, que será el autorizado como adscrito a la concesión, así como las instalaciones hechas al efecto, se tendrá en cuenta su valor, a juicio de peritos.

Tráfico y productos.—Para determinar los productos de la explotación que han de servir de base al cálculo de la anualidad de rescate, se tendrá en cuenta el producto líquido de cada año, esto es, la diferencia que resulte restando de los ingresos los gastos; se tomará el término medio de estas utilidades durante los últimos cinco años, o los que lleve la línea en explotación si no llegaren a cinco, y este término medio será el importe de la anualidad, que se pagará a la Empresa en cada uno de los años que falten para expirar la concesión.

Si por fundadas razones de un probable aumento de tráfico en lo futuro, y por otras consideraciones, el concesionario estima poco remuneradora la cantidad resultante del término medio, podrá reclamar que la apreciación de la anualidad se haga a juicio de peritos; pero esta reclamación no será obstáculo para que el Estado entre en posesión de la línea, abonando la cantidad fijada como término medio, sin perjuicio de una ulterior liquidación como resultado de la tasación de los peritos.

CAPITULO IV

De las autorizaciones de servicios discrecionales

I

Servicios de la clase B.

Artículo 82. El otorgamiento de las autorizaciones de los servicios de la clase B estará siempre subordinado

do a las condiciones y derechos especificados en el capítulo anterior para los servicios regulares, salvo las excepciones expresamente determinadas en el presente capítulo; su existencia será compatible con otras autorizaciones análogas, y no serán nunca obstáculo para que, en todo o en parte de su recorrido, se establezcan servicios regulares, quedando sin efecto la autorización concedida, sin derecho a ninguna indemnización, desde el día que dé comienzo la explotación de dicho servicio regular.

Artículo 83. El que se proponga establecer un servicio de la clase B habrá de presentar en la Junta provincial correspondiente la oportuna solicitud, expresando el itinerario y duración del servicio, número y clase de vehículos que habrá de utilizar, con sus principales características y horario y tarifas que se propone establecer. Acompañará a la solicitud un croquis de la línea.

Cuando la duración del servicio que se solicite exceda de un mes y no pase de seis, presentará con la instancia justificante de ingreso en la Caja general de Depósitos de una fianza de 25 pesetas por kilómetro o fracción; si la duración excede de seis meses, la fianza será de 50 pesetas por kilómetro o fracción. La fianza se devolverá al interesado si la propuesta es desestimada, y se elevará a definitiva si se acepta.

Si el servicio afecta a más de una provincia, se presentarán en cada una los ejemplares expresados, y sólo en la de mayor recorrido el resguardo de fianza, haciendo la oportuna referencia en las demás.

Artículo 84. Las Juntas provinciales, previo informe del Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia y de la Oficina de reconocimiento de automóviles, cuando la importancia del servicio lo aconseje, remitirá con el suyo a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera los expresados documentos pudiendo aprobar provisionalmente los que por su reconocida urgencia así lo requieran, siempre que su duración no exceda de tres meses y en la línea no haya establecido legalmente un servicio regular de transportes. De estas autorizaciones provisionales dará inmediata cuenta a la expresada Dirección general, y si afecta a más de una provincia, habrán de estar de acuerdo las interesadas para otorgarlas.

Si parte del recorrido propuesto está servido por línea o líneas de la clase A, la Junta provincial, previa audiencia de los concesionarios interesados, informará también si procede que realice alguno de ellos el servicio propuesto o la explotación correspondiente al trayecto común.

Esto no obstante, y aun existiendo servicios regulares, si el Presidente de la Junta provincial estima conveniente y de urgencia uno de carácter discrecional que haya sido solicitado, lo ofrecerá al concesionario o concesionarios; negándose éstos a realizarlo, lo comunicará al Presidente de la Junta Central de Transportes quien resolverá respecto a su implantación, dando después cuenta de su acuerdo al Comité en la primera sesión.

Independientemente de estos servicios podrán concederse autorizaciones de servicios temporales por el Comité permanente de la Junta Central, previo informe de la Provincial correspondiente, cuando se trate de transporte de grandes masas de gente con motivo de romerías, ferias

o fiestas que excedan evidentemente la capacidad de transporte de los servicios regulares a que afecten, abonándose en este caso al concesionario la cantidad que complete el importe de la totalidad del servicio ordinario de su concesión, en el recorrido común, durante los días que dure el eventual que se autorice. A este efecto se fijará por el citado Comité, al dar la autorización, el canon que haya de satisfacer el peticionario, que no podrá exceder de una peseta por kilómetro coche y día con el que se atenderá a dicho abono, y el sobrante, si lo hubiere, se pondrá a disposición de la Junta Central, en concepto de fondos de inspección. Estas autorizaciones de servicios temporales se concederán con itinerario fijo y único, sin horario determinado, pero con sujeción a las características de vehículos para servicios públicos de viajeros e inspección establecidos con carácter general y a las tarifas que se autoricen, que no podrán ser superiores a las aprobadas como máximas por la Junta Central.

Artículo 85. El Comité de la Junta Central aprobará o desechará el establecimiento de los servicios discrecionales de la clase B, con las condiciones que estime pertinentes. De sus acuerdos podrán los interesados interponer recurso ante el Ministro de Fomento.

Artículo 86. Estos servicios estarán sujetos al pago de dos céntimos de peseta de canon por conservación de carreteras, sirviendo para determinarlos las reglas dadas al tratar de los servicios regulares y tomando como recorrido kilométrico el que resulte de los horarios aprobados, los que no podrán alterarse en más o en menos sin previa autorización de la Jefatura de Obras públicas correspondiente, dando cuenta a la Dirección general de Ferrocarriles Tranvías y Transportes por carretera.

Cuando el servicio se apruebe con horario indeterminado, los vehículos llevarán un contador kilométrico precintado por la Jefatura de Obras públicas, para que por él se realicen las operaciones del canon en el tiempo y forma que se determinen.

Artículo 87. Para la coordinación a que se refiere el artículo 76 del estatuto sobre la explotación de manantiales de aguas mineromedicinales, aprobado por Real decreto de 25 de Abril de 1928, antes de concederse la autorización para el transporte de los bañistas y agüistas a los dueños de balnearios, se requerirá al concesionario del servicio o servicios regulares de la clase A para que manifieste si se halla en condiciones de atender a las exigencias del establecimiento, que previamente indicará el dueño del mismo. En el caso de no comprometerse a ello, se otorgará la autorización a los dueños por un plazo que no será inferior a cinco años.

Estos servicios se considerarán como de la clase B, los autorizará el Comité permanente de la Junta Central y pagarán el canon en la cuantía y forma establecidas anteriormente.

Artículo 88. Cuando una Compañía de ferrocarril trate de concertar servicios para el establecimiento de Despachos Centrales con objeto de procurar viajes o expediciones directas desde estaciones del ferrocarril a puntos alejados de éste o viceversa, redactará el oportuno contrato, que ofrecerá al concesionario del servicio regular que haya establecido y que recorra en todo o en parte el trayecto, y si éste no lo acepta, quedará en li-

bertad la Compañía del ferrocarril de concertarlo con otra Empresa. Los trayectos no podrán ser superiores a cinco kilómetros, y una vez establecidos los servicios, no se anularán, aunque posteriormente se conceda una línea regular que afecte a dichos proyectos.

Artículo 89. Los servicios solicitados por el Patronato Nacional de Turismo se considerarán como discrecionales de la clase B, y su tramitación podrá alterarse con relación a las reglas anteriores, en la forma que en cada caso acuerde el Comité de la Junta Central, y con carácter general se someterán a las siguientes normas:

1.^a La propuesta formulada por el Patronato Nacional del Turismo lleva en sí la necesidad y utilidad de servicio, que, por tanto, no podrá ser objeto de discusión.

2.^a Los servicios serán únicamente de viajeros, y sus equipajes y las tarifas de percepción habrán de ser superiores, tanto en el recorrido total como en los parciales, a las de aplicación en los ferrocarriles y servicios de la clase A, afectados por el propuesto.

3.^a Los billetes se expendrán exclusivamente desde o para los puntos de interés para el turismo.

4.^a La propuesta del Patronato Nacional del Turismo se anunciará en la *Gaceta de Madrid* y *Boletines Oficiales* de las provincias interesadas, dando un plazo de treinta días naturales, a contar de la publicación del anuncio en la *Gaceta*, para optar al servicio proyectado, cuya concesión se otorgará preferentemente a los ferrocarriles o servicios de la clase A que, afectados por el recorrido, lo soliciten dentro del citado plazo. Las mejoras propuestas en las proposiciones presentadas habrán de respetar siempre lo preceptuado en las anteriores normas 2.^a y 3.^a

El Comité, estudiadas las proposiciones presentadas, resolverá a cuál de ellas se ha de otorgar el servicio, teniendo en cuenta la preferencia establecida. Estos acuerdos tendrán alzada ante el Ministro de Fomento.

5.^a A falta de solicitante, el Patronato Nacional del Turismo tendrá libertad de proponer la Empresa a quien el Comité habrá de otorgar la autorización del servicio propuesto.

II

Servicios de la clase C.

Artículo 90. Los servicios públicos de la clase C solamente se podrán efectuar por vehículos matriculados para los servicios urbanos.

Los que deseen prestarlos lo solicitarán del Presidente de la Junta provincial correspondiente, acompañando los documentos o copias autorizadas que justifiquen que están en condiciones reglamentarias para obtener la autorización.

Artículo 91. La capacidad de estos carruajes no habrá de exceder de la usual en los que prestan servicio corriente de taxis en las poblaciones.

Artículo 92. La Junta provincial, cerciorada de que el peticionario reúne las condiciones referidas para prestar servicio, lo autorizará dándole una tarjeta con arreglo al modelo que determine el Presidente de la Junta Central de Transportes.

Artículo 93. Esta tarjeta será valedera para un año, con obligación de llevarla de una manera ostensible en todos los viajes, y estará sujeta al pago del canon de conservación de carreteras, de 125 pesetas por vehículo y año.

Artículo 94. Siendo condición esencial en los transportes de la clase C que sus servicios se contraten por itinerario y vehículo completo, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.^o de este reglamento, al contraventor de estas disposiciones se le podrá inhabilitar por plazo de un año para prestar servicio público, sin perjuicio de la multa en que pueda incurrir, con arreglo a la Real orden de 1.^o de Septiembre de 1927.

III

Servicios de la clase D

Artículo 95. Los servicios de mercancías de la clase D se registrarán por las normas establecidas para las clases A o B, según que las condiciones con que se pidan se adapten a uno o a otro grupo. Las tarifas, sin embargo, habrán de presentarse más especificadas, según las clases de mercancías para que se soliciten, y si ha de transportar mercancías de todas clases, se establecerán, por lo menos, tres grupos con precios diferentes.

Igual detalle se exigirá en los servicios de la clase A cuando en ellos haya de tener gran extensión el servicio de mercancías, y al concederles se fijará el canon que han de abonar por conservación de carreteras.

CAPÍTULO V

De la explotación de los servicios y del material empleado

I

Itinerarios.

Artículo 96. El concesionario, con una anticipación mínima de treinta días a la fecha de apertura de la línea de servicio público, presentará en la Jefatura de Obras públicas a que afecte el recorrido los itinerarios de los viajes que ha de establecer.

Las Jefaturas los remitirán, con su informe, a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, la que resolverá, oído el Comité, de acuerdo en lo que afecta al transporte de la correspondencia, con la Dirección general de Comunicaciones.

Los demás itinerarios presentados durante la explotación serán aprobados provisionalmente por las Jefaturas, y su decisión será firme si en el término de un mes la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera—en cuyo conocimiento se podrá inmediatamente—no resuelve en contrario.

Artículo 97. En los itinerarios figurará las horas de salida y llegada a los lugares de parada obligatoria y duración de ésta, dentro de la cual habrá de efectuarse el cambio de viajeros y correspondencia.

Habrán paradas discrecionales intermedias, con indicación o sin ella, pero separadas por una distancia mínima de 250 metros.

En la confección de los itinerarios habrá de tenerse en cuenta la combinación y coordinación de servicios que tengan relación con la línea de que se trate, tanto de transportes por carretera como por ferrocarril o tranvías.

Artículo 98. La distancia que comprenda cada línea deberá ser recorrida en el tiempo que fijen los horarios; se consentirá, sin embargo, una tolerancia en el retraso de una cuarta parte del tiempo empleado en el recorrido total.

El retraso se apreciará al final del recorrido, y si excede del límite fijado, sin causa justificada, a juicio del

Ingeniero Jefe de la Inspección, podrá ser penado con una multa que impondrá éste, si no excede de 25 pesetas, y que propondrá a la Junta provincial si estima que procede sea de mayor cuantía.

Artículo 99. En las Oficinas de origen y término de línea se llevará por la Empresa concesionaria un libro-registro de marcha de coches; y un extracto de él, con indicación de los retrasos que excedan de lo tolerado, se remitirá mensualmente a los Ingenieros-Jefes de Obras públicas, así como el cómputo del total de kilómetros recorridos por cada coche en servicio.

Artículo 100. Todo coche de viajeros puesto en marcha tendrá a su servicio, por lo menos, dos personas, el conductor, que no podrá abandonar su puesto mientras haya algún viajero dentro del coche, y un revisor o cobrador. Este será el representante de la Empresa durante el viaje, y tendrá atribuciones para hacer cumplir al público las normas relativas a la policía e higiene de los servicios. Irá provisto de un carnet expedido por el Ingeniero jefe de Obras Públicas de la provincia correspondiente al origen de la línea, documento que le acreditará como tal representante de la Empresa, cuyas iniciales ostentará en la obligatoria gorra de uniforme. Llevará una hoja de ruta, similar a la que se emplea en los ferrocarriles, donde hará constar todas las incidencias de la marcha, y un cuaderno-talonario para las percepciones que tenga que realizar por el transporte de viajeros o sus equipajes.

Es obligatorio un recorrido diario de ida y vuelta para el total de la línea.

El concesionario podrá disponer otros recorridos dentro del día en las mismas condiciones, siendo obligatorio su establecimiento cuando por las necesidades del tráfico así lo acuerde la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, a propuesta de la Jefatura de Obras Públicas, o por acuerdo de la Junta Central o por su propia iniciativa.

Cubierto el servicio ordinario, el concesionario podrá establecer otros especiales o extraordinarios con carácter diario o en días determinados y para trayectos parciales a una sola clase de viajeros, con la aprobación expresa del Jefe de Obras Públicas y a reserva de los que en el término de un mes de la decisión de éste resuelva la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera.

Toda alteración en el horario se pondrá en conocimiento del público y de la Inspección, con ocho días por lo menos de anticipación al en que deba empezar a regir.

II

Tarifas

Artículo 101. El concesionario, con una anticipación mínima de treinta días a la fecha de apertura de la línea al servicio público presentará en las Jefaturas de Obras Públicas de las provincias interesadas los cuadros de precios hechos por lugares de parada, redondeados de cinco en cinco céntimos; la Jefatura los aprobará, si están conformes con las tarifas de concesión, o si, siendo inferiores y de aplicación general, los estima aceptables, comunicándolos así al interesado y a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, siendo firme la aproba-

ción si ésta no opone reparo en el término de un mes.

En las paradas discrecionales, el viajero que tome el vehículo satisfará el precio que corresponde abonar desde la parada fija inmediatamente anterior en el sentido de la marcha.

Artículo 102. Si el concesionario desea rebajar los precios con carácter general, podrá hacerlo dando cuenta a la Jefatura de Obras Públicas, y si la rebaja es para una sola clase o recorridos parciales, necesitará la aprobación expresa de la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y transportes por carretera, no consintiendo, en general, que se perciba para igual clase mayor precio en menor recorrido, salvo en circunstancias especiales, que se justificarán al aprobarlos.

Artículo 103. La unidad de percepción será viajero o tonelada y kilómetro o fracciones; en este segundo caso, de cinco kilogramos y con un mínimo de percepción en todos de 0,50 pesetas, salvo renuncia del concesionario.

Todo kilómetro empezado a recorrer se considerará como recorrido por completo.

Artículo 104. Los precios de tarifa se aplicarán con absoluta igualdad de trato, prohibiéndose, en su consecuencia, los tratos de favor y los contratos particulares con determinada persona o entidad.

Las rebajas que se hagan en atención a la persona o entidad que la solicite necesitarán ser aprobadas por la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y transportes por Carretera.

Artículo 105. Pasados los cinco años de estar en explotación una línea, si han variado las condiciones generales y precios normales de los transportes, podrá procederse a la revisión de las tarifas, y la Junta Central de Transportes, previos los informes de las Juntas provinciales y de las Jefaturas de Obras públicas a que afecte la concesión, podrá fijar otras nuevas, que en el caso de no ser aceptadas por los concesionarios, podrán ser causa de rescisión del contrato sin pérdida de la fianza. Asimismo se podrán revisar esas tarifas en cualquier momento de aquel período si las circunstancias especiales así lo aconsejaren.

Las Juntas provinciales, en este último caso, formularán propuestas en este sentido a la Junta Central, por su iniciativa o a petición de los concesionarios.

III

Reglas referentes al servicio de viajeros

Artículo 106. En los puntos de origen y término de línea, y en los intermedios que, por su importancia, designe la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, habrá un local que, con exclusión de otro servicio, se destinará al de viajeros, para que puedan en él proveerse de billetes y esperar la salida de los coches; en él estarán expuestos los horarios y precios de los viajes y ejemplares de este Reglamento y de los de circulación con motor mecánico y urbana e interurbana.

Este local se abrirá al público una hora antes, por lo menos, de la salida de cada coche, y el despacho de billetes se abrirá con la anticipación que se determine, que no será, en ningún caso, inferior a quince minutos.

Toda percepción por precio de viaje estará sujeta a tarifa, y de ella se dará siempre al viajero un billete o

cupón en que, entre otros datos, figurarán como esenciales los siguientes: entidad explotadora, día, mes y año, coche para que se ha de utilizar, puntos de salida y término, clase y precio.

En los puntos en que exista despacho de billetes, éstos se expendrán por orden de petición, y el viajero tendrá que estar provisto del correspondiente que le autorice a ocupar asiento; a falta de él estará obligado a descender del coche, y si la falta se nota en ruta, satisfará doble precio desde el origen de la línea hasta el punto en que termine el viaje.

En las paradas intermedias en que no haya local ni empleado de la Empresa, dará el billete en ruta al viajero el cobrador del coche.

Podrán despacharse billetes en días anteriores a la salida del coche que se haya de utilizar, y en este caso el viajero tendrá derecho a elegir sitio por el orden de presentación.

Al efecto, la Empresa le presentará el esquema del vehículo con los asientos numerados, y al elegido se le pondrá la oportuna indicación cuando el coche esté preparado para la salida.

Por la reserva de cada asiento en las condiciones indicadas, podrá percibir la Empresa un suplemento de 0,50 pesetas.

Salvo esta reserva de asientos, los viajeros irán ocupando los que prefieran por el orden de acceso al carruaje, conservando su derecho en las paradas del trayecto.

El viajero podrá llevar a la mano los bultos que, por su forma, volumen y olor, no molesten a los demás, y puedan ser colocados debajo o encima de asiento que ocupe.

Los niños hasta cuatro años no pagarán asiento; pasando de esa edad lo satisfarán por completo.

Artículo 107. No se permitirá la entrada en los coches a ninguna persona en estado de embriaguez ni que lleve armas de fuego.

Se prohíbe asimismo escupir o fumar en los carruajes, así como llevar perros.

Artículo 108. De todo accidente que ocurriese durante la marcha se dará conocimiento a la Jefatura de Obras públicas correspondiente, y si afecta a la seguridad de los viajeros u obliga a suspender el viaje o lo retrasa por más de tres horas, se comunicará además al Gobernador civil de la provincia.

En tal caso, por el medio más rápido posible, la Empresa prestará, a sus expensas, los auxilios necesarios en los primeros momentos, y si el coche queda inútil, habrá de sustituirle con la mayor premura, bien avisando al de reserva o procurándose uno que lo sustituya para llevar a los viajeros a su destino.

Artículo 109. Será obligatoria la existencia de un libro de reclamaciones en todos los puntos de parada en que haya establecida Oficina de servicio de viajeros o mercancías. Dicho libro se pondrá a disposición del que lo solicite y en él deberá estampar el público las quejas o reclamaciones que estime oportuno, relativas a faltas o deficiencias en la explotación del servicio.

Artículo 110. Las reclamaciones a que diere lugar el contrato de transporte se sustanciarán con arreglo a la legislación común.

En su consecuencia, toda acción cuyo objeto sea puramente mercantil dirigida contra las Empresas y relativa a los transportes, se entablará ante los Tribunales ordinarios.

Artículo 111. Servirán de complemento a las reglas que quedan expuestas las contenidas en los artículos 23 a 32 del Reglamento de circulación de vehículos con motor mecánico, y en el capítulo 12 del de circulación urbana e interurbana.

IV

Equipajes y mercancías

Artículo 112. Servirán de complemento a las reglas que quedan expuestas también la facturación de equipajes en el mismo local, si no molesta al público, o en otro contiguo en otro caso.

El billete del viaje da derecho al transporte gratuito de 15 kilogramos de equipaje, entendiéndose por tal el que se determina en las disposiciones de ferrocarriles.

Esa cantidad de equipaje irá en la imperial del coche que transporte a su dueño, y en el mismo, o en la expedición más próxima, si en él no cabe, irá el exceso de equipaje, cuyo porte habrá de abonar el viajero a la salida con arreglo a la tarifa correspondiente.

Tanto del equipaje como de su exceso se dará al viajero un talón, en que deberán constar los puntos de origen y término, número de bultos, peso y precio percibido.

En los puntos de parada donde la Empresa no tenga obligación de tener un local, no será obligatoria la admisión del equipaje del viajero; pero si se consiente, el cobrador habrá de dar un talón en la misma forma, sustituyendo el peso por otras indicaciones más detalladas de la clase de los bultos.

Si el equipaje no va en el mismo coche del viajero, y el exceso no llega a su destino lo más tarde a las veinticuatro horas que aquél, la Empresa incurrirá en retraso, a los efectos del cumplimiento del contrato de transporte.

Artículo 113. Es obligación de la Empresa el transporte de los 15 kilogramos de equipaje; en cuanto al exceso, la obligación de la Empresa respecto a la cantidad estará limitada a los medios de transporte con que cuente, según su concesión, lo mismo se entenderá en relación con las mercancías. El plazo de entrega de éstas en el destino será dato que habrá de figurar en el talón-resguardo que la Empresa ha de entregar en el momento de hacerse la facturación, en el cual podrá exigirse del remitente el pago del importe que, en otro caso se efectuará a la llegada a su destino.

En uno y otro caso, la Empresa será responsable de los efectos que se le confíen, bajo recibo, para el transporte, y a fin de que éste se verifique ordenadamente y sin preferencia, habrá de llevar libros registros donde consten, como datos esenciales, día de facturación, clase, peso y precio.

Artículo 114. Mientras no se reglamente con carácter general cuanto se refiere al transporte de mercancías en estos servicios regulares, las Empresas en que dicho transporte adquiere alguna importancia vendrán obligadas a presentar un reglamento para su ordenada explotación, que, previos los oportunos informes, habrá de ser aprobado por la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

Se prohíbe el transporte de personas en los vehículos dedicados al transporte de mercancías.

Por excepción, se podrá conceder autorización para transportar en ellos obreros que estén al servicio de la entidad que utilice el vehículo.

Estas autorizaciones se concederán por el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la respectiva provincia, previo informe de la Oficina inspectora de automóviles, y será condición indispensable que acompañen el contrato de trabajo como justificante de que los obreros se hallan al servicio de la entidad que transporta.

V

Del material empleado en la explotación

Artículo 115. No se admitirá en el interior de cada carruaje más viajeros que los correspondientes al número de asientos.

Se prohíbe admitir viajeros en el imperial de los carruajes sin previa autorización escrita del Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia origen de la línea, quien tendrá facultades para señalar los carruajes, número de plazas, trayectos y demás condiciones en que podrán admitirse, siendo recurribles sus disposiciones ante la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transporte por Carretera.

En la parte interior de cada carruaje destinado a viajeros se colocará una tablilla que exprese el número que le corresponde y el de los asientos, cuyas separaciones irán marcadas de una manera precisa. Otra tablilla contendrá en extracto las disposiciones reglamentarias que más directamente interesen a los viajeros, y en letrero separado las prohibiciones de fumar y escupir.

Artículo 116. Cada coche destinado al transporte público por carretera llevará un libro de ruta donde conste el nombre y domicilio del concesionario, cláusulas principales de la concesión, marca y principales características, número de asientos, línea a que está adscrito, servicio, que presta, accidentes que le ocurran y reconocimientos y reparaciones de que sea objeto.

La Empresa tendrá siempre en buen estado el material de explotación, que será como mínimo el fijado como tal en su explotación.

Además de los reconocimientos prevenidos para esta clase de vehículos en las disposiciones vigentes; será obligatorio realizar nuevos reconocimientos después de todo accidente grave que pueda afectarle y cuando lo ordene el Ingeniero Jefe de Obras Públicas.

Si el desarrollo del tráfico hiciere necesario aumento de carruajes, a propuesta de la Jefatura de Obras Públicas o de la Junta provincial, oída la Empresa, y después de emitir informe la Junta central, resolverá la Dirección general de Ferrocarriles, dando un plazo prudencial para adquirirlo con carácter obligatorio.

Es de la competencia de la misma Dirección, previos los mismos trámites, y con el informe de la Oficina de reconocimiento de vehículos de la provincia, el desechar el material que resulte inservible.

Las normas del presente capítulo, obligatorias siempre en los servicios regulares, lo serán en los discrecionales, en la medida que consientan las condiciones en que fueron autorizados. Las dudas que sobre esta materia puedan ofrecerse las resolverá la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera. De estas resoluciones cabrá recurso de alzada ante el Ministro de Fomento.

CAPÍTULO VI

De la inspección de los servicios y de las correcciones disciplinarias

I

De la inspección

Artículo 117. La inspección y vigilancia de los servicios públicos de transporte por carretera encomendados a las Jefaturas de Obras públicas de las provincias por el Real decreto de 22 de Febrero de 1929, tendrá como misión primordial la de velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas o que se dicten con relación a dichos servicios, y por el de los acuerdos de las Juntas Central y provinciales que para estos efectos se les comuniquen. Para el mejor desempeño de su cometido, tendrán presente las mencionadas Jefaturas:

a) Las condiciones de la concesión de los servicios regulares y de las autorizaciones a los discrecionales;

b) El Real decreto de 22 de Febrero de 1929, Reglamento para su aplicación, disposiciones anteriores que continúen vigentes y Ordenes que en lo sucesivo se dicten;

c) Los Reglamentos de policía y conservación de carreteras, circulación de vehículos con motor mecánico y circulación urbana e interurbana.

Además de las condiciones anteriores, las jefaturas de Obras públicas dedicarán atención preferente:

1.º A que se cumplan todas las disposiciones que se relacionan con la seguridad de la circulación.

2.º A que se cuide de cuanto afecta a la regularidad y buen servicio especialmente en lo relativo a tarifa y horario.

3.º A que se vigile todo lo relativo a comodidad de los viajeros, en cuanto concierne a estaciones, espacio de asientos, estado de limpieza y conservación del coche.

Artículo 118. La inspección estará a cargo de la Jefatura de la provincia, auxiliada por un Ingeniero de la misma y un Auxiliar facultativo, por lo menos. El número de Auxiliares podrá ser mayor cuando lo exija la necesidad del servicio, a juicio del Ingeniero Jefe.

El personal de Capataces y Peones camineros, tanto de las carreteras del Estado como de las provinciales y de las a cargo del Circuito Nacional de Firmes Especiales, tendrán la obligación de cooperar a la ejecución de los mencionados servicios, con arreglo a las instrucciones que reciban del Ingeniero Jefe de Obras públicas de la provincia.

Las Oficinas de reconocimiento de automóviles quedarán obligadas a evacuar rápidamente, haciendo uso de sus atribuciones, cuantos reconocimientos e inspecciones crean necesarios (a parte de las reglamentarias) el Ingeniero Jefe de Obras públicas, en todas las ocasiones en que surja la necesidad de comprobar las condiciones de seguridad de los vehículos en circulación y la competencia de los conductores de los mismos.

Los Capataces y Peones camineros de las carreteras arriba mencionadas tendrán por misión fundamental la vigilancia constante de estos servicios, según las instrucciones que reciban, denunciando todo vehículo que, destinado al servicio público, circule sin los permisos reglamentarios o sin el justificante de la clase de servicio autorizado por las Juntas de Transportes.

Procurará evitarse por la Inspección que los servicios de la clase C se realicen diariamente, aunque sea alternando con varios propietarios

de coches autorizados de esta clase, siempre que ello pueda significar una competencia en las líneas otorgadas por servicios de la clase A.

Cuantas denuncias relativas al servicio público se hagan por estos agentes o por los demás encargados de la policía de las carreteras serán tramitadas al Ingeniero encargado de la inspección, el cual, con los medios a su alcance, deberá comprobarlas rápidamente, proponiendo al Ingeniero Jefe las sanciones ordinarias que crea pertinentes.

Artículo 119. Los concesionarios estarán obligados a poner a disposición del Ingeniero encargado de la inspección todos los documentos que éste considere necesarios para comprobar si la organización de los servicios, cobro de tarifas y obligaciones que se deduzcan de la concesión se cumplen con arreglo a las condiciones establecidas, así como facilitar el examen de los libros de contabilidad y estadística que obligatoriamente han de llevar.

Cuando una empresa tenga establecidos servicios en varias provincias y centralizada la contabilidad en otra distinta a la en que se necesiten datos de esta clase, la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera designará el funcionario que haya de examinar los libros.

Si del resultado del examen de documentos se dedujera alguna infracción de obligaciones o defectos en los servicios, el mencionado Ingeniero lo comunicará al Jefe de la provincia, con informe razonado, y propondrá las sanciones que estime procedentes y medios de corregir los defectos observados. El Ingeniero Jefe elevará, con su informe, la propuesta del Ingeniero a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

Cuando las concesiones afecten a más de una provincia, en cada una de ellas ejercerá la inspección la Jefatura correspondiente. Si de la inspección hecha en una provincia resultaran faltas que afecten a otras, el Ingeniero Jefe de aquella lo comunicará a los Jefes respectivos, los cuales, a su vez, darán cuenta a la Dirección general, con remisión de los antecedentes.

Artículo 120. Se ejercerá la vigilancia mediante visitas y viajes periódicos, que hará el Ingeniero encargado o el subalterno a quien corresponda el servicio, y las extraordinarias que, con motivo justificado, disponga el Ingeniero Jefe de la provincia.

El número de visitas y viajes obligatorios en el periodo de un año se fijará, para cada concesión o servicio, por los Ingenieros Jefes de las provincias, que deberán tener en cuenta su importancia y las circunstancias que en cada caso concurren; el Ingeniero encargado determinará cuándo han de realizarse, dentro del expresado periodo.

Del resultado de las visitas dará cuenta el Ingeniero encargado de la inspección al Jefe de la provincia, con las observaciones que juzgue necesarias, y proponiendo cuanto estime conveniente para la mejora de los servicios, dentro de las obligaciones impuestas en las concesiones, y señalando también las faltas o defectos observados y las sanciones correspondientes. El Ingeniero Jefe dará cuenta a la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, para que ésta proceda conforme a las atribuciones que le confiere este reglamento.

Artículo 121. De todo accidente se dará cuenta a la Dirección general de Ferrocarriles por la Jefatura de la provincia, y, cuando la gravedad del caso lo requiera, ordenará ésta la instrucción del oportuno expediente, que remitirá a la primera con su informe, proponiendo las medidas que a su juicio deban adoptarse.

Artículo 122. Los concesionarios deberán enviar a la Jefatura de Obras públicas una relación detallada de los puntos en que se encuentran los coches en servicio y reserva y darán parte de cualquiera modificación que introduzcan en ella, así como cada vez que ha sido necesario poner en servicio un coche de reserva.

Igualmente deberán dar cuenta a la Jefatura de los retrasos o suspensiones del servicio, con indicación detallada de las causas que lo hayan motivado.

Artículo 123. Antes de comenzar la explotación de todo servicio de la clase A y de los sujetos a fianza de la clase B, se levantará acta, suscrita por el representante de la Empresa, por el Ingeniero Jefe de Obras públicas o funcionario en quien delegue y por el Ingeniero designado por la oficina de reconocimiento de vehículos de la provincia, en la que se haga constar que se cumplen todas las condiciones con que se ha otorgado la concesión, correspondiendo a este último el reconocimiento de cuanto afecte a los motores de los vehículos, y el resto de ellos, así como locales y demás elementos esenciales de la explotación, a la Jefatura de obras públicas.

Del acta se extenderán cuatro ejemplares, quedando el original en la Jefatura de obras públicas, y destinándose las copias al concesionario y a las Juntas central y provincial, respectivamente.

Si el servicio afecta a más de una provincia, el acta se levantará en la de mayor recorrido, y se remitirán copias también a las otras Jefaturas y Juntas provinciales interesadas.

II

De las correcciones disciplinarias

Artículo 124. Sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden, podrán ser corregidas con multa las faltas cometidas en los servicios de transporte público por carretera:

a) Por los concesionarios de líneas regulares.

b) Por los autorizados para servicios discrecionales.

c) Por los dueños de vehículos matriculados como de servicio particular que lo presten público indebidamente.

d) Por los dueños de vehículos de servicio público que lo presten sin la oportuna autorización del organismo correspondiente; y

e) Por los viajeros que realicen actos contrarios a las disposiciones del presente reglamento.

Artículo 125. Las faltas se clasificarán en leves y graves.

Para su clasificación se tendrán presentes, como normas generales, el carácter de precepto infringido y el detalle consignado en la Real orden de 1.º de Septiembre de 1927.

Los correctivos correspondientes a las faltas leves serán impuestos por los Ingenieros Jefes de Obras públicas de las provincias, con arreglo al procedimiento señalado en el reglamento de 16 de Junio de 1926 de circulación de vehículos con motor mecánico, no debiendo exceder su cuantía de 25 pesetas, pudiendo los interesados entablar recurso ante la

Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, previo depósito de la cantidad de cien pesetas, que quedará en beneficio del Estado en caso de ser adversa la resolución para el recurrente.

Las multas por faltas graves serán propuestas por el Ingeniero Jefe de obras públicas e impuestas por la Junta provincial correspondiente, con alzada ante la Dirección general mencionada, que oirá a la Junta Central, y recurso ante el Ministerio de Fomento en las superiores a 1.500 pesetas (en la forma ya expresada en este reglamento), presentando en el plazo de quince días, a contar de la notificación. En ambos casos será condición indispensable el depósito previo en metálico en la Caja general de Depósitos del importe de la multa recurrida.

Artículo 126. Se considerarán siempre faltas graves las clasificadas como tales en el presente reglamento, y muy especialmente las que afecten a la seguridad de los viajeros y al cumplimiento de las cláusulas de la concesión.

Artículo 127. La inspección de estos servicios en las Provincias Vascongadas y Navarra estará a cargo del Ingeniero Jefe de Vías y Obras provinciales y personal a sus órdenes, sustituyendo al Ingeniero Jefe de Obras públicas en todas las funciones que se le encomiendan en el presente reglamento.

CAPITULO VII

De la jurisdicción y de los recursos

Artículo 128. En virtud de lo dispuesto en el Real decreto de 29 de Marzo de 1901, que confiere al Ministro de Fomento la iniciativa y dirección de todos los servicios del Ministerio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.º del Real decreto-ley de 3 de Noviembre de 1928, le corresponderá exclusivamente la ordenación de los servicios de transportes mecánicos por carretera, mediante las Autoridades y organismos que se detallan en el capítulo 2.º de este reglamento.

A la jurisdicción ordinaria corresponde, con arreglo a las leyes, el conocimiento de las reclamaciones de índole civil que se produzcan con ocasión del contrato de transportes, entre las entidades concesionarias de los servicios de transportes, los viajeros y los cargadores y consignatarios de mercancías.

Será privativo de la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento y resolución de los recursos que ante la misma se produzcan contra las resoluciones de la Administración en materia de transportes mecánicos por carretera, de acuerdo con lo prevenido en la ley reguladora de esta jurisdicción.

Artículo 129. Contra los acuerdos que dentro de su privativa competencia adopten las Juntas provinciales de Transportes, se dará el recurso de alzada ante la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera.

El término para la interposición de estos recursos será el de quince días, a partir de la notificación del acuerdo.

Se incoará ante la misma Junta provincial, la cual, dentro de tercero día, lo remitirá con su informe a la Dirección general.

La Dirección resolverá el recurso dentro de los treinta días siguientes, previo informe del Comité o de la Junta Central, según su competencia,

y su acuerdo agotará la vía gubernativa.

Artículo 130. El recurso de alzada ante el Ministro de Fomento se dará contra las resoluciones de la Junta Central o de la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera.

El recurso de alzada ante el Ministro habrá de fundarse necesariamente en una de las causas que a continuación se mencionan, además de las explícitamente consignadas en este reglamento:

1.ª Infracción de las disposiciones vigentes que regulen la concesión de los servicios.

2.ª Quebrantamiento u omisión de algún o algunos de los trámites procesales precisos en la tramitación de los expedientes para obtener las concesiones.

Artículo 131. Habrá lugar al recurso de alzada por infracción de las disposiciones vigentes en la materia:

1.º Cuando la resolución impugnada contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de los preceptos legales o aplicables al caso del recurso.

2.º Cuando la resolución no sea congruente con la concesión o servicio objeto del concurso o del derecho de tanteo ejercitado en el expediente por haberse ampliado o restringido la que debiera ser materia de la concesión.

3.º Cuando el acuerdo contenga disposiciones contradictorias.

4.º Cuando en la apreciación de los elementos que influyen en la mejora de un proyecto inicial de servicio de transportes haya habido error de derecho o error de hecho, si este último resulta de documentos o actos auténticos que demuestre la equivocación evidente de la Junta Central o de la Dirección.

Artículo 132. Habrá lugar al recurso de alzada por quebrantamiento u omisión de los trámites procesales:

1.º Cuando en el curso del expediente para la concesión se hubiere omitido alguno de los trámites que se detallan en los artículos 33 al 41 de este reglamento.

2.º Cuando no se hubiere justificado la personalidad de cualquiera de los interesados en el expediente o de sus representantes legales.

3.º Cuando en el curso del expediente se hubiere pedido por alguno de los interesados que fueran parte en el expediente la práctica de alguna diligencia de comprobación de los elementos que influyen en la mejora de un proyecto inicial del servicio de transportes y no se hubiera practicado.

4.º Cuando el acuerdo de concesión no se hubiera tomado por suficiente número de Vocales de la Junta Central, esto es, que haya faltado el «quorum» reglamentario para ella.

Artículo 133. El que intentare promover un recurso de alzada ante el Ministro de Fomento, presentará ante la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, en el término improrrogable de diez días, contados desde el siguiente al de la notificación o publicación del acuerdo recurrido, un escrito manifestando su intención de interponer el recurso y solicitando que se le expida para ello certificación literal del acuerdo.

Transcurrido este plazo quedará firme y ejecutivo el acuerdo.

Artículo 134. Solicitada la certificación, ésta se expedirá por la Se-

cretaría de la Junta Central, y la Dirección pondrá en conocimiento de todos los interesados el recurso interpuesto, por si conviniere a su derecho comparecer ante el Ministerio para formular las alegaciones que estimen pertinentes a su derecho.

El plazo para que el recurrente y los demás interesados formalicen el primero su recurso y los segundos sus alegaciones será de quince días, contados desde la fecha en que la Dirección entregue al primero la certificación del acuerdo que hubiere de impugnar y ponga en conocimiento de los demás la interposición del recurso, notificación que será simultánea a la entrega de la certificación, y se entenderá hecha por la publicación de la misma en la *Gaceta de Madrid*.

Artículo 135. El mismo día que se entregue la certificación al recurrente se remitirá al Ministerio el expediente con todos sus antecedentes, y si hubiere habido votos particulares, certificación de los mismos.

Artículo 136. Dentro del término señalado en el artículo 133, el recurrente presentará en el Ministerio el escrito formalizando el recurso de alzada. En él será condición indispensable citar el número de los artículos en los que se funde el recurso, citándose además con precisión y claridad el precepto legal que se haya infringido y el concepto en que lo haya sido, y en párrafos numerados cuando sean varios los motivos de infracción alegados.

Con el escrito formalizando el recurso se acompañarán:

a) El poder que acredite la personalidad del recurrente, cuando no sea el mismo interesado quien formalice o suscriba el recurso.

b) La certificación del acuerdo impugnado.

c) El resguardo de un depósito de 1.000 pesetas, efectuado en la Caja general de Depósitos a disposición del señor Ministro de Fomento, y tantas copias simples del recurso y como concurrentes hubiera habido para obtener la concesión.

Los interesados que estimaren conveniente a sus derechos comparecer en el recurso de alzada lo harán mediante sendos escritos al Ministro de Fomento, solicitando que se les tenga por parte en el recurso, dentro del mismo plazo concedido al recurrente para formalizar su recurso.

Artículo 137. Recibido el recurso y los escritos de los interesados que hubieren comparecido en el recurso, éstos podrán recoger en el Negociado Central las copias del recurso para lo cual tendrá un plazo de cinco días, pudiendo, durante otros cinco, presentar los oportunos escritos coadyuvando o impugnando el recurso.

El hecho de no recoger las copias en el plazo señalado o no presentar los escritos de coadyuvación o impugnación se estimará como desistimiento y obandono del derecho.

Artículo 138. Transcurridos los términos señalados, el negociado Central del Ministerio de Fomento, a quien compete la tramitación y propuesta de resolución en los recursos de alzada, formulará la correspondiente propuesta, que será sometida al acuerdo definitivo del señor Ministro. Dictado éste y con la Real orden resolutoria, firmada por el señor Ministro, se devolverá a la Dirección general el expediente con todos sus antecedentes, para ejecución y oportunas notificaciones de los interesados.

Artículo 139. Cuando la resolución sea desestimatoria del recurso, el recurrente perderá las mil pesetas del depósito, las cuales serán ingresadas en la Tesorería de la Junta Central. De haberse estimado recurso, se devolverán al recurrente, ordenándose así en la resolución.

CAPITULO VIII

Disposiciones generales

Artículo 140. La presente reglamentación se entenderá—por lo que pueda afectar a los Ayuntamientos—que se refiere única y exclusivamente a los caminos de carácter vecinal y no a las vías urbanas dentro de los cascos de las poblaciones, en las que los Municipios regularán con absoluta autonomía cuanto se refiere a transportes.

Artículo 141. Las Empresas de servicios de la clase A y la de los sujetos a fianza de la clase B nombrarán un representante para recibir las órdenes y comunicaciones que se le dirijan relacionadas con su explotación; dicho representante habrá de comunicar el punto de su residencia, que deberá estar enclavado dentro de la línea que represente.

Artículo 142. Los servicios concedidos o autorizados no podrán ser arrendados ni subarrendados sin autorización expresa de la Junta que los autorizó, y los empresarios, además de obligarse al cumplimiento de las condiciones de su concesión o autorización, con arreglo a las disposiciones vigentes, quedan también obligados al cumplimiento de las que en lo sucesivo se dicten con carácter general.

Artículo 143. Los reglamentos u órdenes de servicio que formulen las Empresas para la explotación de sus líneas serán puestos en conocimiento de las Juntas provinciales y Jefaturas de Obras públicas respectivas, así como de la Dirección general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por carretera, necesitando la aprobación de éstas cuando afecten a la seguridad de la explotación o a las relaciones del público con las Empresas.

Remitirán a los mismos organismos ejemplares de las tarifas e itinerarios que tengan aprobados para la explotación de las líneas.

Artículo 144. Se concede un plazo de tres meses, a contar de la publicación del presente reglamento, para que las concesiones de servicios regulares en funcionamiento se pongan por completo en condiciones legales, cumpliendo en todas sus partes las cláusulas de su concesión; si, pasado ese plazo, se comprueba por los Ingenieros de la Jefatura de Obras públicas que no se cumple lo pactado en la concesión, se incoará el oportuno expediente, que podrá conducir a la declaración de su caducidad.

Artículo 145. Queda derogado el reglamento aprobado por Real orden de 11 de Diciembre de 1924, en cuanto se oponga a lo establecido en el presente.

Disposiciones transitorias

1.ª Las peticiones de servicios regulares que no hayan sido aún objeto de información pública, o su tramitación esté interrumpida por culpa de los interesados, y todas las de los discrecionales, cualquiera que sea su situación, se tramitarán con arreglo a los preceptos de este reglamento dándose un plazo de tres meses, a partir de su publicación en la *Gaceta de Madrid*, para que por los interesados se complete la documentación y se cum-

plan los demás requisitos exigidos, entendiéndose que los que dejen de efectuarlo renuncian al servicio solicitado, pudiendo retirar la fianza depositada.

2.^a Seguirán su tramitación con arreglo a las normas anteriores a las consignadas en el presente reglamento, en todo lo que afecte al derecho de los solicitantes, las peticiones de servicios regulares que se hallen en alguno de los casos siguientes:

a) Las que hayan tenido su origen en derechos concedidos por Real decreto de 4 de Julio de 1924 por estar efectuando transporte de correspondencia pública o por circular con anterioridad a su promulgación.

b) Las que hayan sido objeto de información, concurso o adjudicación provisional.

Por excepción, será potestativo en la Junta Central otorgar o no concesiones de servicios comprendidos en el anterior apartado cuando el recorrido sea inferior a 20 kilómetros.

Si, en uso de esta facultad, fuesen concedidos servicios, será condición precisa que los concesionarios se sometan a lo que dispone el presente reglamento en cuanto se refiere a fianza, mínimo de material y máximo de tarifas.

Si alguno de los peticionarios no aceptara las anteriores condiciones, se entiende que renuncia a su concesión, teniendo derecho únicamente a que se les devuelva la fianza que hayan depositado.

3.^a En cumplimiento de lo que dispone la circular de la Junta Central de 6 de Junio de 1927, todas las Empresas o particulares que se hallen circulando en virtud de los preceptos contenidos en la Real orden de 16 de Marzo de 1925 y Real decreto de 20 de Febrero de 1926, cesarán en la prestación del servicio el día 5 de Julio próximo, fecha en que terminan los cinco años de plazo concedidos para ello.

Por excepción se ampliará ese plazo para aquellos servicios cuya circulación hubiere estado interrumpida por haberlo decretado así las Juntas provinciales o central. La ampliación, en este caso, será por un período de tiempo igual al que haya durado el paro forzoso, cuya justificación correrá a cargo de los interesados.

4.^a Para concertar el pago del canon de conservación e inspección a que se refiere el artículo 8.^o del Real decreto de 22 de Febrero de 1929, el Presidente de la Junta Central invitará a la Cámara de transportes mecánicos de Madrid para que presente, en un plazo que no excederá de dos meses, un proyecto que, una vez informado por la Junta Central, se elevará al Ministro para su resolución, siendo conveniente y necesario para la buena marcha de la recaudación, que en dicha entidad se hallen inscritos el mayor número posible de concesionarios.

Aprobado por S. M.
Madrid 22 de Junio de 1929.—Rafael Benjumea.

(Gaceta del 26 de Junio.)

Ministerio de la Gobernación

REAL ORDEN CIRCULAR NÚM. 1.057.

Excmo. Sr.: Por Real orden de 12 de Abril de 1923, inserta en la GACETA del 13 del mismo mes y año, se disponía que los Ayuntamientos con presupuestos de más de 100.000 hasta 200.000 pesetas tienen la obligación

de adquirir el aparato denominado «Marca para tallar» en el plazo de seis años, el cual ha transcurrido ya, y habiéndose dirigido a este Ministerio Real orden del Departamento del Ejército en que manifiesta ser cada día mayor el número de casos en que se producen incidencias por la gran diferencia que existe entre las tallas de los mozos consignadas por los Ayuntamientos en las filiaciones y las que alcanzan al hacer su presentación en las cajas y Cuerpos activos, lo que es motivado por carecer muchos Ayuntamientos de dicho aparato, declarado reglamentario por Real orden circular de 4 de Septiembre de 1920:

En virtud de lo expuesto, se servirá V. E. ordenar la inserción de la presente Real orden en el *Boletín Oficial* de esa provincia y requerir a los Ayuntamientos que reúnan las condiciones dichas, debidamente relacionados en el citado *Boletín Oficial*, la obligación que tienen de adquirir la mencionada «Marca para tallar» por haber transcurrido con exceso el plazo que para ello se les concedió por Real orden mencionada, debiendo V. E. dar cuenta a este Ministerio de haberlo efectuado, con remisión de un ejemplar del *Boletín Oficial* en que se inserte la circular.

De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 31 de Agosto de 1929.—Martínez Anido.

Señores Gobernadores civiles de todas las provincias.

(Gaceta del 6 Septiembre.)

Dirección general de Administración

En virtud del concurso anunciado en la *Gaceta* de 9 de Julio de 1929, han sido nombrados Interventores de fondos municipales de las corporaciones que abajo se citan los señores que a continuación se expresan, advirtiéndose que la publicación que se hace de estos nombramientos no los convalidará si estuviesen hechos con infracción de alguna disposición reglamentaria.

Madrid, 28 de Septiembre de 1929.—El Director general, E. Vellando.

Relación que se cita

D. Fernando Bergillos Naval, Navalcarnero (Madrid).

D. Vicente Serra Ferrer, Seiges (Barcelona).

D. José Barés Tonda, Vélez Rubio (Almería).

D. Ricardo Cascó Almirall, Villafranca del Panadés (Barcelona).

D. José Barés Tonda, Moguer (Huelva).

D. Simeón Ferriols Cuenca, Utiel (Valencia).

D. Armando García Mendoza y Lorenzo, Grado (Oviedo).

(Gaceta del 1.^o de Octubre.)

Ministerio de Fomento

REAL ORDEN NÚM. 289.

Ilmo. Sr.: La disposición transitoria primera del reglamento de Transportes, aprobado por Real orden de 22 de Junio último, previene que en el plazo de tres meses, a partir de su publicación en la *Gaceta de Madrid*, se complete la documentación y se cumplan los demás requisitos exigidos en el mismo por los peticionarios de servicios regulares que no hayan sido aún objeto de información pública o su tramitación esté interrumpida por culpa de los interesados, así como los discrecionales, cualquiera que sea su situación.

La Junta provincial de Transportes de Navarra se ha dirigido a la Central, poniendo de manifiesto los inconvenientes con que han tropezado los peticionarios de aquella provincia para cumplir en el plazo fijado los preceptos reglamentarios, proponiendo, en su consecuencia, la concesión de una prórroga, para que puedan acogerse a dicha transitoria tanto los que vienen circulando con autorización anterior a la constitución de las Juntas, como los que tenían solicitado servicios de la clase A o B, y que la tramitación estaba en suspenso por diferentes causas. En otras provincias pudieran existir casos de una u otra clase que, como los anteriores, venían obligados a cumplir las prescripciones reglamentarias; pero teniendo en cuenta que de no accederse a los solicitados se producirían perjuicios al interés público, que conviene evitar, procede se otorgue la prórroga pedida, estableciendo alguna sanción para los que teniendo la obligación de cumplir las disposiciones de carácter general dictadas han esperado a última hora, cuando ya no hay tiempo material de que reúnan la documentación necesaria, y a este efecto,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:

1.^o Que se amplíe hasta el 31 de Diciembre próximo el plazo de tres meses fijado por la transitoria primera del reglamento de 22 de Junio último, quedando sin efecto en dicha fecha todas las peticiones que en el citado plazo no se hayan hecho de acuerdo con los preceptos del mismo.

2.^o Los peticionarios que se hallen circulando en virtud de autorizaciones anteriores al 4 de Julio de 1924 y no presenten en el indicado plazo la documentación correspondiente, cesarán en los servicios que vengán realizando en 31 de Diciembre de 1929, y si obtienen la concesión o autorización en su caso, vendrán obligados al pago, en concepto de multa, en la Secretaría de la Junta provincial de una cantidad igual al importe de un semestre, con arreglo al canon que se les fije al otorgarles el servicio.

3.^o Los que no se hallen circulan-

do por carecer de autorización, estarán también obligados a abonar, por el mismo concepto, en la indicada Secretaría, una cantidad igual al importe de un trimestre, con arreglo al canon que se les fije al otorgarles la concesión o autorización en su caso.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 19 de Septiembre de 1929.—Benjumea.

Señor Director general de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera.

(Gaceta del 21 de Septiembre.)

AVISO IMPORTANTE

Todos los edictos que no sean de oficio, anuncios de subastas de los Ayuntamientos y anuncios particulares para ser publicados en este BOLETÍN, deben remitirse con expresión del nombre y domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se insertan.

Los edictos o anuncios que no contengan esta indicación dejarán de publicarse, declinando esta Administración toda responsabilidad por los perjuicios que de ello pudieran derivarse.

Consultas Públicas Provinciales

completamente gratuitas

Enfermedades venéreas y sífilíticas.—Dispensario antivenéreo anejo al Hospital de la Misericordia.—Consulta para hombres: todos los días, a las seis de la tarde.

Consulta para mujeres: martes y sábados, a las once de la mañana.

Consulta para pretuberculosos y tuberculosos. (Dispensario antituberculoso).—Lunes, miércoles y viernes, a las doce de la mañana.

Consulta de Puericultura y enfermedades de los niños de pecho.—(Gota de Leche).—Martes, de cuatro a cinco de la tarde, y sábados, de doce a una.

Enfermedades cancerosas.—Hospital de la Misericordia.—Martes y sábados, a las nueve de la mañana.

IMPRENTA PROVINCIAL